

**La Interpretación Prejudicial Como Causal De Anulabilidad Del Laudo Arbitral En
Colombia**

Presentado por:

María Camila Cleves Lissa - 41141093

Valery Estefanny Cuellar Villabon - 41141172

Julieth Stefanny Pérez Díaz - 41141398

Asesor:

Dr. Oscar Alberto Rivera Rodriguez

Monografía De Investigación



Universidad libre - sede candelaria

Facultad de derecho, ciencia política y sociales

Bogotá D.C. Colombia

2018

Aceptación

Valoración_____

Calificación _____

Jurado

Jurado

Jurado

Autoridades académicas universidad libre

Directivas nacionales

Presidente nacional

Jorge Alarcón Niño

Vicepresidente

Jorge Gaviria Liévano

Rector nacional

Fernando Dejanón Rodríguez

Secretario general

Floro Hermes Gómez Pineda

Directivas seccionales

Presidente seccional

Julio Roberto Galindo

Rector seccional

Jesús Hernando Álvarez Mora

Decano facultad de derecho

Fernando Arturo Salinas Suárez

Secretaría académica

Ana Roció Niño Pérez

Director centro de investigaciones

John FitzGerald Martínez Vargas

Coordinador del área de investigación

Belisario Daza González

Tabla de Contenido

| | |
|--|----|
| Introducción | 1 |
| Capítulo I. Contextualización del Problema de Investigación | 3 |
| 1.1. “La Interpretación Prejudicial en el Derecho Comunitario Andino” | 3 |
| 1.2. El Derecho Comunitario: Generalidades, Naturaleza Jurídica, Características Y | |
| Composición Normativa | 4 |
| 1.2.1. Definición..... | 4 |
| 1.2.2. Naturaleza Jurídica..... | 4 |
| 1.2.3. Características | 4 |
| 1.2.4. Composición Normativa | 5 |
| 1.3. Tribunal de Justicia Andina: “Acción de Interpretación Prejudicial” | 5 |
| 1.3.1. Competencia..... | 6 |
| 1.3.2. Nivel Supranacional | 7 |
| 1.4 Acción De Interpretación Prejudicial | 7 |
| 1.4.1. Definición..... | 8 |
| 1.4.2. Titulares De La Acción | 10 |
| 1.5 El Recurso De Anulación Contra Laudos Arbitrales | 11 |
| 1.5.1. “Inexistencia, Invalidez O Inoponibilidad Del Pacto Arbitral” (ley 1563, 2012, art. | |
| 41, #1). | 14 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nulidad Absoluta | ¡Error! Marcador no definido. |
| Nulidad Relativa..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 1.5.2. “La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia.” (Ley 1563, 2012, art. 41, #2). | 16 |
| 1.5.3. “No haberse constituido el tribunal en forma legal.” (Ley 1563, 2012, art. 41, #3) | 17 |
| 1.5.4. “Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación, o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no se hubiere saneado la nulidad” (Ley 1563, 2012, art. 41, #4). | 18 |
| 1.5.5. “Haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando se hubiere alegado la omisión oportunamente mediante el recurso de reposición y aquella pudiera tener incidencia en la decisión” (Ley 1563, 2012, art. 41, #5). | 19 |
| 1.5.6. “Haberse proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración, adición o corrección después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral” (Ley 1563, 2012, art. 41, #6) | 20 |
| 1.5.7. “Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo” (Ley 1563, 2012, Art. 41, #7) | 21 |
| 1.5.8. “Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutive o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral” (Ley 1563, 2012, art. 41, #8) | 21 |

| | |
|--|----|
| 1.5.9. “Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento” (Ley 1563, 2012, art. 41, #9) | 22 |
| 1.6 Exposición Del Comportamiento Histórico Del Objeto Del Problema De Investigación | 23 |
| 1.7 Marco teórico para la solución del problema | 24 |
| 1.7.1. Improcedencia de la taxatividad en las causales de anulación | 24 |
| Capítulo II. Conceptualización de la respuesta a la pregunta de investigación | 28 |
| 2.1 ¿Cómo opera la taxatividad en las causales de anulación de laudos arbitrales con la implementación de la interpretación prejudicial del tribunal de justicia de la comunidad andina en Colombia? | 28 |
| 2.2 Análisis ficha jurisprudencial | 30 |
| 2.2.1. Hechos | 31 |
| 2.2.2. Problema Jurídico | 33 |
| 2.2.3. Ratio Decidendi | 33 |
| 2.3 Análisis ficha doctrinal # 1. | 42 |
| 2.3.1. Análisis del contenido | 43 |
| 2.4 Análisis ficha doctrinal # 2. | 47 |
| 2.4.1. Análisis jurídico | 48 |
| 2.5 Entrevistas: | 52 |

| | |
|---|----|
| 2.6 Análisis Del Enfoque Jurídico Aplicado En Las Causales De Anulación De Laudos Arbitrales y La Interpretación Prejudicial..... | 58 |
| 2.7 La interpretación prejudicial como causal de anulación enmarcada en el derecho interno y en el derecho comunitario. | 59 |
| Capítulo III. Validación de la hipótesis de investigación | 60 |
| 3.1 Análisis Crítico Sobre Las Causales De Anulabilidad Del Laudo Arbitral | 60 |
| Conclusiones | 68 |
| Referencias | 69 |
| Lista de anexos | 71 |
| Anexos: | 71 |

Introducción

El Consejo de Estado a través de la sentencia 43281 de 2012, trae a colación una nueva causal de anulación, la cual es la no solicitud de la interpretación prejudicial, para que así se acate a lo dispuesto por la sentencia del 26 de agosto de 2011, la cual dicto el Tribunal Andino, evidenciando no solamente que, las causales de anulación no son plenamente taxativas y que, aun cuando el recurso de anulación tiene su sustento en la forma, y se interpone únicamente por vicios procedimentales, emerge a la posibilidad que con esta nueva causal el recurso de anulación procede por vicios de fondo, es decir, que se abre el espacio para que las causales de anulación también pueden operar por vacíos sustanciales como en el recurso de apelación.

Por lo anterior, emerge el interrogante acerca de ¿Cómo opera la taxatividad en las causales de anulación de laudos arbitrales con la implementación de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Colombia?

Para responder la incógnita, esta investigación se desarrolló con base en un enfoque jurídico, bajo la corriente del pensamiento positivista, de estudio normativo del arbitramento como instrumento para salir de problemas interpersonales y la supremacía del derecho comunitario en el derecho interno colombiano, teniendo por línea institucional de investigación responder a la dinámica que ha acogido el ordenamiento jurídico nacional respecto a las decisiones del TJCA y su influencia directa en relación con las interpretaciones extensivas que este ha realizado en conjunto. Asimismo, se ha tomado por método de investigación el de análisis y síntesis de normas, jurisprudencia y doctrina realizándolo de forma detallada y exhaustivo junto con el caso Comcel S.A vs ETB, utilizando técnicas como lo fue la recolección de datos a través de fichas jurisprudenciales y doctrinales; complementándolo con entrevistas a expertos en el tema, cuyo

fin es brindar un mayor entendimiento frente a las posturas que han acogido los órganos jurisdiccionales internos.

Por tanto, en el primer capítulo se desarrolla y se abordan los conceptos en materia del derecho comunitario andino, sus características, aplicación, causales de anulación de la Ley 1563 de 2012 y el tema en el que versa nuestra investigación: la interpretación prejudicial. Además, se aporta el antecedente histórico que originó la implementación de una nueva causal por parte del TJCA, más las dos posturas que han venido tomando los doctrinantes en Colombia sobre el tema.

En el segundo capítulo se esclarece la inoperancia de la taxatividad de las causales de anulación, con base a una serie de técnicas que se utilizaron para obtener la información necesaria de expertos en materia de derecho comunitario andino y de arbitraje, cuyo estudio tiene origen en el caso de Comcel S.A y ETB, el cual nos llevó a conocer que, el Estado Colombiano al ser parte de la Comunidad Andina debe actuar con base en las normas supranacionales y pronunciarse frente a la omisión del tribunal compuesto por árbitros, al no solicitar la interpretación prejudicial. Por ende, al no haberse tramitado la interpretación prejudicial por no ser causal de anulación, el TJCA la introdujo al ordenamiento jurídico nacional basándose en la prevalencia de la normatividad que constituye el derecho andino sobre el derecho interno.

El tercer capítulo ejecuta la validación de nuestra hipótesis reflejando la solución al problema de la inoperancia de la taxatividad de las causales de anulación en Colombia desde un enfoque exploratorio partiendo de la normatividad, jurisprudencia y doctrina.

Esta monografía tiene como fin examinar de manera detallada por qué no opera la taxatividad en las causales de anulación a que se refiere la ley 1563 de 2012 reflejando de esta manera la inoperancia de la misma.

Capítulo I. Contextualización del Problema de Investigación

1.1. “La Interpretación Prejudicial en el Derecho Comunitario Andino”

Es menester afirmar que las causas que se enumeran en la ley para atribuir la anulación de laudos arbitrales en Colombia son definidas por la Ley 1563 del 2012 como taxativas, y que se puede interponer el recurso extraordinario de anulación única y exclusivamente por vicios de forma. Sin embargo, el Magistrado Ponente Jaime Orlando Santofimio (sentencia 43281 del 09 de agosto de, 2012) decidió anular 3 laudos arbitrales proferidos por el Tribunal de Arbitramento, por no haber solicitado la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia Andino antes de fallar sobre la controversia suscitada por ETB vs COMCEL.

En consecuencia, el Consejo de Estado a través de su fallo, trae a colación una nueva causal de anulación, la cual es la no solicitud de la interpretación prejudicial, evidenciando no solamente que, las causales de anulación no son plenamente taxativas y que, aun cuando el recurso de anulación tiene su sustento en la forma, y se interpone únicamente por vicios procedimentales, emerge a la posibilidad que con esta nueva causal el recurso de anulación procede por vicios de fondo, es decir, que las causales de anulación también pueden operar por vacíos sustanciales como en el recurso de apelación.

Por lo tanto, se buscará examinar de manera detallada por qué no opera la taxatividad en las causales de anulación a que se refiere la ley 1563 de 2012 y de qué manera procede el trámite de anulación por la nueva razón que introdujo el Consejo de Estado, es decir, la interpretación prejudicial junto con su sustento sustantivo y de fondo. Además, se identificará las diferentes posturas que han tomado las autoridades doctrinales frente al fallo proferido por el Tribunal en mención, referentes a la implementación de la nueva causal de anulación acogida por el Consejo de Estado a través de la vía jurisprudencial.

1.2. El Derecho Comunitario: Generalidades, Naturaleza Jurídica, Características Y

Composición Normativa

1.2.1. Definición. El derecho comunitario andino proviene del Acuerdo Suscrito en la ciudad de Bogotá, el 26 de mayo de 1969, que más adelante con la Decisión 001 fue denominado El Acuerdo de Cartagena, integrado por los Estados de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.

1.2.2. Naturaleza Jurídica. El Acuerdo de Cartagena es un instrumento jurídico internacional que: “Tiene la naturaleza de un tratado internacional de carácter constitutivo o primario que actúa con una función para-constitucional y que de tales normas fundamentales -los Tratados- del que derivan a su vez otras, trabadas en una estructura coherente y jerarquizada que a causa de este talante súper-lega resulta incorporado a los ordenamientos jurídicos de los países miembros del proceso de integración andino, con alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicables en cada Estado miembro” (Rueda, 1990, pg. 149).

1.2.3. Características. El derecho comunitario andino se circunscribe dentro del Derecho de integración ya que según Rodero García (1990) al ser un ordenamiento jurídico autónomo e independiente del cual es de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros y se inscribe dentro de los ordenamientos internos de quienes lo integran.

Se entiende que es autónomo ya que no depende de ningún otro ordenamiento jurídico, que, si bien se enmarca en el derecho internacional público, su normatividad no tiene relaciones de dependencia y están facultados para crear sus propios órganos.

Es un ordenamiento jerarquizado, con plena capacidad jurídica para la creación de sus propias normatividades, siendo completamente independiente.

1.2.4. Composición Normativa. “Derecho Primario: Son aquellas normas fundamentales contenidas en los tratados públicos suscritos por los Países Miembros junto con sus protocolos y modificaciones” (Consejo de Estado, 43281, 2012).

Derecho Secundario: Son aquellas decisiones declaradas por los órganos de la comunidad cuyas regulaciones deben ser obedecidas por los países miembros.

Fuentes complementarias: Son aquellos actos y decisiones cuyo fin es la orientación, aplicabilidad e interpretación en la ejecución del ordenamiento andino.

Fuentes auxiliares: Es cuando los Estados que hacen parte de la Comunidad brindan apoyo mediante sus actos o disposición para que el mismo tenga armonía en su aplicación normativa.

En consecuencia, el Derecho que rige la Comunidad propende por:

“Una redistribución de poderes entre los Estados intervinientes en el proceso y los órganos de la comunidad creada, pues quedan capacitados todos para generar un Derecho derivado de un trabajo constitutivo común a toda área andina y que se inserta en los ordenamientos jurídicos nacionales con valor superior al de la ley nacional, a la que desplaza o sustituye, en forma directa y automática” (Sáchica, 1990, p.11).

1.3. Tribunal de Justicia Andina: “Acción de Interpretación Prejudicial”

Es un órgano jurisdiccional que integra la comunidad andina y tiene su origen con la suscripción del Tratado creada en Cartagena el 28 de mayo de 1979 y que posteriormente con él se denominó con el (Protocolo Modificatorio del acuerdo de Cartagena, 1996) “Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, entrando a regir el 25 de agosto de 1999, su base normativa está regida de conformidad con el Tratado de Creación del Tribunal el Estatuto del Tribunal.

“Artículo 4.- Naturaleza y fines del Tribunal

El Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros.

El Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, actuará salvaguardando los intereses comunitarios y los derechos que los Países Miembros poseen dentro del ordenamiento jurídico andino” (Decisión 500, 2001).

“Artículo 41. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se rige por el Tratado de su creación, sus protocolos modificatorios y el presente Acuerdo. El Tribunal tiene su sede en la ciudad de Quito, Ecuador” (Acuerdo de Cartagena, 1969).

El tribunal es un órgano independiente y tiene prevalencia en su aplicación sobre los conflictos que se presenten entre los Estados Miembros.

1.3.1. Competencia. “El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina” (Protocolo Modificadorio del acuerdo de Cartagena, 1996), toma sus decisiones a través de resoluciones de carácter administrativas, acuerdos, autos y sentencias. Por tanto, sus competencias son las siguientes:

Nivel Estatal

a. Acción Directa: Es aquella por medio del cual el titular puede acudir directamente ante el TAJ sin que medie un juez.

La acción de Incumplimiento: Es aquella por la cual se tiene por finalidad el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario y sancionar a los Países Miembros infractores.

“Arbitramento: El TAJ puede dirimir las controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de contratos, acuerdos o convenios suscritos entre órganos e instituciones del

sistema Andino de Integración o entre éstos y terceros, mediante arbitraje y cuando las partes así lo acuerden” (Protocolo modificadorio del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, art 38).

b. Acción indirecta: Es aquella por la cual el titular debe previamente interponer la acción (acción de consulta prejudicial) ante el juez nacional.

Acción de consulta prejudicial: Aquella que busca que los jueces nacionales apliquen la normatividad andina.

1.3.2. Nivel Supranacional

a. Acción Directa: La acción de nulidad: Es un recurso por medio del cual se busca el control legal del ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito que se ajuste a las regulaciones expedidas por los órganos comunitarios.

“Arbitramento: El Tribunal es competente para dirimir mediante arbitraje las controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de contratos, convenios o acuerdos, suscritos entre órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración o entre éstos y terceros, cuando las partes así lo acuerden” (Protocolo Modificadorio del Tratado de creación del Tribunal de Justicia Andino, 1999, art 38, inciso I).

b. Acción Indirecta: Acción de Interpretación prejudicial: Esta acción, se explicará con mayor detalle más adelante. Sin embargo, es menester aclarar que en el nivel supranacional el TAJ debe interpretar por vía prejudicial la norma comunitaria mientras que el nivel nacional, los jueces pueden solicitar la interpretación prejudicial cuando se controvierta una norma del orden andino.

1.4 Acción De Interpretación Prejudicial

1.4.1. Definición

La interpretación prejudicial ha sido definida como:

“un mecanismo por el cual el órgano jurisdiccional nacional y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el orden de sus propias competencias, son llamados a contribuir directa y recíprocamente en la elaboración de una decisión para asegurar una aplicación simultánea, uniforme y descentralizada del Derecho comunitario. Se establece así una cooperación horizontal, viva, entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los órganos jurisdiccionales de los Países Miembros para lograr dicho fin” (Vigíl, 2004, p. 940).

Quiere decir, que la acción de interpretación prejudicial es el mecanismo que utiliza el juez nacional o los tribunales nacionales para solicitar la interpretación de alguna normatividad del ordenamiento jurídico andino aplicable a una determinada controversia. Por tanto,

“La interpretación prejudicial consiste en la atribución, que tiene el juez o tribunal nacional que esté conociendo de un caso en el que deba aplicar o se controvierta alguna norma del ordenamiento jurídico andino de solicitar directamente o por petición de una de las partes que el TJCA le indique - en abstracto - la forma como deben interpretarse las normas jurídicas andinas que resulten aplicables al caso o sobre cuya posible aplicación exista controversia entre las partes” (Targarife, 2016, p.211).

“Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros” (Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la comunidad andina, 1996).

La solicitud realizada por el juez al TAJ puede ser facultativa u obligatoria,

“la primera comprende todos aquellos supuestos en los que la decisión del tribunal nacional, que aplica Derecho Comunitario Andino, no sea susceptible de ser atacada por recurso judicial, según las disposiciones del derecho interno. En estas circunstancias el juez se encuentra constreñido a realizar el reenvío al Tribunal de Justicia. En cambio, es facultativa siempre que contra dicha sentencia del juez nacional existan -según el ordenamiento interno- vías recursivas por las cuales sea posible su cuestionamiento. Frente a dicha hipótesis es discrecional la decisión del juez de consultar al Tribunal de Quito” (tjca) (Perotti, 2002 pp. 129-130).

En otras palabras, la solicitud del juez nacional o árbitro es facultativa cuando el caso determinado se derive de los recursos ordinarios

“La interpretación prejudicial facultativa, a diferencia de la obligatoria, no suspende el proceso judicial interno, por lo cual, si llegare el momento de dictar sentencia sin que se hubiera recibido la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, deberá decidir el proceso. Lo anterior tiene fundamento en el hecho de que las partes tienen a su disposición los recursos ordinarios contra la sentencia, que permitirían al mismo juez o a su superior jerárquico, incorporar el criterio del Tribunal comunitario antes de la sentencia definitiva, sin perjuicio de la celeridad en el trámite del proceso judicial interno” (Tangarife, 2005. pg. 406).

“Artículo 122.- Consulta facultativa. Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (Decisión 500, 2001).

Por otro lado, la solicitud es obligatoria para aquellos casos en los cuales no hay recurso ordinario en el derecho interno o es de única instancia ya que,

“La suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituyen un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él ‘no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias’. Este requisito previo debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo” (Gálvez, 2001, pp. 142-143).

“Artículo 123.- Consulta obligatoria. De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal” (Decisión 500, 2001).

“Artículo 124.- Suspensión del proceso judicial interno. En los casos de consulta obligatoria, el proceso interno quedará suspendido hasta tanto se reciba la interpretación prejudicial solicitada” (Decisión 500, 2001).

1.4.2. Titulares De La Acción

El juez nacional de los países miembros es el único facultado para interponer la acción de interpretación prejudicial, y deberá tramitarla según el Artículo 125 y 126 del tratado que regula el Tribunal andino.

“Artículo 125.- Condiciones y requisitos para la formulación de la consulta. La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; c) La identificación de la causa que origine la solicitud; d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta” (Decisión 500, 2001).

“Artículo 126.- Trámite. Recibida la solicitud de consulta, el Secretario la sellará, dejará constancia en ella de la fecha de presentación o recepción, y la remitirá al Presidente para su consideración por el Tribunal.

Dentro del término de treinta días siguientes al de la admisión de la solicitud por el Tribunal, éste dictará sentencia.

En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto. El Tribunal no interpretará el contenido y alcance del derecho nacional ni calificará los hechos materia del proceso, pero podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada” (Decisión 500, 2001).

1.5 El Recurso De Anulación Contra Laudos Arbitrales

El arbitramento, es un mecanismo útil frente a los escenarios en que las personas se encuentran en conflicto de intereses, el cual es definido mediante la legislación: “(...) Un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes difieren a árbitros la

solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice.” (...)” (Ley 1563, 2012, art. 1)

Asimismo, este se encuentra consagrado Constitucionalmente como: “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de (...) árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.” (Constitución Política de Colombia, 1991, Art. 116).

En otras palabras, podemos determinar, que el proceso del arbitramento tiene como propósito administrar justicia, mediante el cual, los árbitros contarán con facultades jurisdiccionales para dirimir conflictos de intereses, brindando decisiones judiciales; estas potestades que se les atribuye en las normas mencionadas anteriormente se reflejan y expresan mediante el **Laudo Arbitral**, el cual es legislativamente “(...) La sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. El laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico. En los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho” (Ley 1563, 2012, art. 1), es decir, “El resultado final del arbitraje es un laudo arbitral. El laudo es la manifestación de los árbitros mediante la cual se da solución a la controversia que dio lugar al arbitraje. El laudo debe observar los términos pactados por las partes en el acuerdo sobre la fórmula de arreglo de eventuales conflictos” (Yeraldin Alvarado Valenzuela, 2014).

Al analizar el objetivo del arbitraje y que este se exterioriza mediante el laudo arbitral como la decisión final. No obstante, se presenta el aspecto fáctico en que las partes no se encuentren conformes con el juicio del árbitro reflejado en el laudo, motivó que la legislación consagra la

posibilidad de impugnar el mismo; objeto de nuestro estudio en la tesis, ostentando en el artículo 40 de la ley 1563 de 2012.

Principalmente, es importante analizar que este recurso conforme lo manifiesta el Consejo de Estado:

“(…) No constituye una segunda instancia y no puede emplearse como mecanismo para reabrir el debate probatorio ni para modificar la valoración de las pruebas realizada por el Tribunal de Arbitramento” (Consejo de Estado, sección tercera, 56494, 2016). Esto nos permite deducir que es un recurso de carácter extraordinario, pues como se afirma en el mismo enunciado, el laudo arbitral es de única instancia, por lo tanto, no sería factible interponer un recurso ordinario, puesto que el mismo no es susceptible de segunda instancia.

En vista de ello, es sustancial comprender que como no procede la segunda instancia en esta clase de proceso y que el recurso extraordinario de nulidad se enmarca en unas causales consagradas normativamente; esto infiere en que dichas causales se alegan es por la forma y no por el fondo o de lo contrario no cumpliría con la finalidad del mismo, conforme lo expresa el Tribunal:

“La naturaleza extraordinaria y excepcional del recurso de anulación de laudo arbitral, así como su finalidad primordial tendiente a proteger la garantía fundamental al debido proceso, hacer que este solo sea procedente por vicios procedimentales o in procedendo, mas no de juzgamiento o in iudicando y con fundamento en las causales expresa y taxativamente señaladas en la ley.” (Consejo de Estado, sección tercera, 57422, 2016).

En consecuencia, es fundamental señalar que no solo puede hacerse alusión a las causales al interponer el recurso, sino como lo afirma la misma sentencia, se requiere

“también que cada una de estas se sustenten clara y suficiente, de forma tal que el juez de anulación no se encuentre obligado a realizar un esfuerzo interpretativo adicional para tratar de deducir la causal que se aduce”. (Consejo de Estado, sección tercera, 57422, 2016).

Dicho esto, y como enfoque de la tesis de pregrado es vital enunciar cada una de las causales, explicándolas:

1.5.1. “Inexistencia, Invalidez O Inoponibilidad Del Pacto Arbitral” (ley 1563, 2012, art. 41, #1). Esta causal se configura en el momento que las partes celebran el negocio jurídico, objeto de la materia para analizar al expedir el laudo arbitral y en este caso sobre el análisis del recurso de anulación; quiere decir lo mencionado, que son unas formalidades mínimas que se exigen para que el negocio jurídico sea válido o de lo contrario se podría declarar su nulidad.

“Causal De Inexistencia Para Declarar La Nulidad Contra El Laudo Arbitral” Inexistencia, descende cuando se omite un elemento sustancial al realizar un negocio jurídico.

Esta misma se ocasiona por: “I) la omisión de alguno o algunos de los elementos esenciales del negocio jurídico que se proyecta celebrar; II) por la ausencia del objeto; III) por la ausencia de la causa; IV) por la ausencia del querer dispositivos; V) por la omisión de la solemnidad requerida para el perfeccionamiento del negocio; y VI) por la falta de entrega de la cosa sobre la cual versa el negocio, si el proyectado es real” (Consejo de Estado, Sección Tercera, 57422, 2016).

Se debe interpretar lo anterior como aquellos requisitos formales, en este caso, que debe componer el laudo, motivo que sin ellos, se perdería la sustancia del mismo, para así poder identificarlo y de igual manera, poder plantear la validez frente a la vida jurídica y a las partes que les afecte o beneficie la decisión que en el mismo se plantea.

De lo contrario, si no se cumplen dichos requisitos, se incurriría a una invalidez dicho laudo y en caso que una de las partes encuentre dicha omisión de exigencias medulares, tendrá la facultad de objetar la decisión tomada por los árbitros, para que esta misma no tenga efectos.

“Causal De Invalidez Para Declarar La Nulidad Contra El Laudo Arbitral” Es el “juicio negativo de valor que se le hace a un acto dispositivo de interés con el que se vulnera una norma imperativa, las buenas costumbres o cualquier norma establecida en favor de personas susceptibles de especial protección” (Consejo de Estado, Sección Tercera, 57422, 2016).

Es decir, que es un análisis crítico que se desarrolla hacia una persona, para poder identificar si tiene las suficientes capacidades, desarrollo de personalidad y edad para ejecutar dichos negocios que contraen diversas obligaciones y derechos, de los cuales puede ser beneficiado o perjudicado. No obstante, este no se podrá ejecutar a nivel interpersonal, sino se requiere de una autoridad judicial para que reconozca lo contrario.

No obstante, se puede identificar el caso, en que la persona cumpla las capacidades, pues no ha sido declarado contrariamente por la autoridades legislativas o judiciales, pero en él puede influir perturbación en el consentimiento cuando: confunde la realidad de lo que realmente sucede; está contrayendo una presión por una persona en el exterior sin darse cuenta de las circunstancias o mediante engaños llega a celebrar el negocio; incurriendo una de estas situaciones fácticas que se manifiestan, se podría alegar una invalidez pero de carácter relativo.

Aparte de analizar a las personas que intervienen en dicho proceso, influye la necesidad de comprender los componentes que tenga el documento, objeto que se analiza para dirimir controversias, pues este mismo, no debe obstruir las obligaciones que se exigen legales, contrario

sensu, este no sería de carácter lícito y por ello se declararía de carácter absoluto, la nulidad del mismo.

“Causal de inoponibilidad para declarar la nulidad contra el laudo arbitral” “Será inoponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley exija”. (Decreto 410, 1971, art. 899).

En otras palabras, el laudo no tendrá ningún efecto contra personas en las que no influye el caso concreto, contrario, únicamente tendrá influencia lo decidido por los árbitros aquellas personas que intervinieron en el mismo.

1.5.2. “La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia.” (Ley 1563, 2012, art. 41, #2).

La Caducidad. En el caso entre el Hospital el tunal ESE y la empresa Fresenius Medical Care SA el Consejo de Estado, 37004, (2010) citado por (Yeraldin Alvarado Valenzuela, 2014.) especifica que la caducidad

“Es así como, se ha dicho que se configura siempre que se dé esté ante una de las siguientes circunstancias: i) que el laudo recaiga sobre materias no susceptibles de ser sometidas a arbitramento, contrariando con ello la Constitución y la ley, ii) que se aborden asuntos que las partes no dejaron sujetos a la decisión de los árbitros, desconociendo que la competencia está limitada y restringida a la materia que señalen las partes, y iii) que se exceda la relación jurídico procesal delimitada por la demanda y su contestación, violando el principio de congruencia”

Vale resaltar, que se convierte un imposible factico que los árbitros procedan a emitir un laudo consonante a unos hechos que manifiestan los interesados, cuando la acción para solicitar

que se conforme el tribunal caduca, porque si así fuera que se emitiera, perdería completamente eficacia para que esta decisión surta efectos.

Falta De Jurisdicción Y Competencia. En primera medida la jurisdicción se debe entender como aquel mecanismo que se funda la administración de justicia, otorgando la posibilidad para que el mismo, puede adaptar el Derecho consagrado en la constitución, normas, jurisprudencia y demás documentos que tengan fuerza vinculante en Colombia y asimismo pueda tomar una decisión justa, acoplándose a lo anteriormente dicho.

Por otra parte, la competencia, es aquella subdivisión que se extrae de la jurisdicción, caracterizado por el conocimiento en determinadas ramas del Derecho que pueda tener cada órgano e institución.

Así las cosas, en el Estatuto desprenden que son las partes quienes disponen de especificar la jurisdicción y competencia para llevar a cabo el cumplimiento del pacto arbitral. Por lo tanto, las partes al acudir de carácter voluntario a los árbitros para que accedan el tribunal, son ellos quienes les otorga competencia a las autoridades para que emitan el respectivo laudo.

1.5.3. “No haberse constituido el tribunal en forma legal.” (Ley 1563, 2012, art. 41, #3).

Esta causal surge del cumplimiento normativo consagrado en el Estatuto de Arbitraje que dispone en los artículos 7 y 8 una serie de exigencias como: la cantidad de árbitros, las cualidades de los árbitros, restricciones que deben cumplir los árbitros y demás requisitos necesarios.

Pues como se nombraba en la causal anterior, las partes están legitimadas para escoger sus árbitros, el proceso para llevar a cabo y las normas en las que se van a fundamentar. No obstante,

el doctrinante Jorge Hernán Gil (1993) citado por (Yeraldin Alvarado Valenzuela, 2014), establece unos casos, en los que se puede configurar la causal, los cuales son:

“Cuando los árbitros no reúnen los requisitos legales o convencionales; Cuando se elige un número de árbitros diferente al previsto en el pacto o en la ley; Cuando tratándose de arbitraje administrado, los árbitros no forman parte de la lista del respectivo centro; Cuando la aceptación del cargo es extemporánea, a pesar de lo cual el designado actúa en el proceso.; Cuando el tribunal se integra de manera diferente a la autorizada por la ley, por ejemplo, si cada parte nombrará un árbitro; Cuando el tribunal es nombrado por persona o entidad que no tenía competencia para ello según la ley o el convenio arbitral; y Cuando el árbitro debe ser removido por inasistencia no obstante lo cual continúa su actuación en el proceso”

Se debe de entender apoyando la tesis que se pronuncia anteriormente, esta causal se forma cuando no se cumplen todos los requisitos manifestados en los artículos en mención, es de menester comprender que la ley los señala de carácter claro, conciso y breve.

1.5.4. “Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación, o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no se hubiere saneado la nulidad”
(Ley 1563, 2012, art. 41, #4).

Indebida Representación. Ilustrada ésta como la capacidad para que las personas puedan ser parte del proceso que se lleva a cabo en el Tribunal conformado por los árbitros, ya sea porque son aquellas personas, que requieren de una representación para actuar por unas respectivas cualidades que le impiden actuar por si solas, como son las personas jurídicas; pues si se omitiera ello, no se podría ejecutar los actos que se requieren a nivel procesal.

La indebida notificación o emplazamiento. La notificación conocida como el mecanismo para que la contraparte tenga conocimiento que hace parte de un proceso y así se pueda amparar diversos derechos constitucionales, entre esos la defensa, por ello, el artículo 23 del Estatuto de arbitraje, ofrece la posibilidad de utilizar medios de comunicación a nivel electrónico, para que así las partes tengan conocimiento de cada etapa procesal a la que se pretende continuar y asimismo puedan comunicarse con el juez mediante escritos.

Proporcionado al anuncio de que este causal puede ser saneada será adaptado a los lineamientos del Código General del Proceso, como lo manifiesta el Consejo de Estado, por ello se aplicará en los casos: que no se alegó, cuando se revalide, si no se vulneran derechos que regulen el derecho procesal.

1.5.5. “Haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando se hubiere alegado la omisión oportunamente mediante el recurso de reposición y aquella pudiera tener incidencia en la decisión” (Ley 1563, 2012, art. 41, #5). Esta causal, contrae una estrecha relación con los derechos procesales que adquieren las partes en el procedimiento arbitral, motivo que las mismas, tienen derecho aportar pruebas, contradecir pruebas, entre otras. Sin embargo, esta se conforma cuando no se decretó dichas pruebas necesarias para el proceso sin alguna motivación legal y alegue de carácter oportuno

No obstante, Yeraldine Alvarado Valenzuela, (2014) afirma la existencia de un tercer requisito el cual consiste en “Que se trate de una prueba que pudiera tener alcance decisivo en el resultado del proceso.” (Yeraldine Alvarado Valenzuela, 2014).

Así las cosas, se comprende que a nivel procesal es fundamental que la decisión se compongan a base con las pruebas practicadas dentro del mismo y es necesario que las partes se encuentren atentos a lo que sucede, por ello, si existe un acto que afecte la práctica de una determinada prueba y esta se fundamental para que el árbitro tome la decisión, esta actúe oportuna y adecuadamente, con el propósito de lograr una decisión justa, sin vulneración de derechos.

1.5.6. “Haberse proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración, adición o corrección después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral” (Ley 1563, 2012, art. 41, #6). Teniendo en cuenta el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012, el cual en relación con el término dice que: “por regla general será de seis meses”, esto sucederá, salvo que las partes hubieran acordado un tiempo totalmente distinto para que sea efectivo el proceso arbitral, con el principal propósito de que se ejecute en un tiempo razonable, sin embargo, las mismas partes podrán prorrogar el tiempo, no obstante, el objetivo, como se decía anteriormente es que el tiempo escogido para llevar a cabo el proceso sea sensato y prudente.

Lo anterior permite establecer, primero, que el término de duración en principio puede ser determinado por las partes y segundo, que en caso de no serlo éste será determinado por la ley. Dicho término empezará a correr una vez se dé por terminada la primera audiencia, la cual se desarrolla “Concluida la audiencia, comenzará a contarse el término de duración del proceso”. (Ley 1563, 2012, Art. 30)

La ley también desarrolla en su artículo 11 frente al término, regula la debida de forma de suspender o interrumpir dicho proceso, sin que este exceda los 120 días

Por su parte el artículo 35, evidencia que, al finalizar el término del proceso, cesan las funciones de los árbitros como jueces, lo cual invalidaba cualquier pronunciamiento ya se sobre el laudo propiamente, su aclaración, adición o corrección.

1.5.7. “Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo” (Ley 1563, 2012, Art. 41, #7). Según el artículo 1, inciso tercero de la Ley 1563 de 2012,

“El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. El laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico” (Ley 1563, 2012, art. 1).

Por otra parte, en su artículo 3, inciso tercero, se faculta a las partes a determinar su naturaleza, de lo contrario se dará aplicación a lo establecido en la ley.

“En el pacto arbitral las partes indicarán la naturaleza del laudo. Si nada se estipula al respecto, este se proferirá en derecho” (Ley 1563, 2012, art. 3).

1.5.8. “Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutive o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral” (Ley 1563, 2012, art. 41, #8). “La presente causal según Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección C, en su providencia del nueve (9) de junio de dos mil diecisiete (2017), con radicación 11001-03-26-000-2016-00153-00(58.109), prevé dos supuestos. Primero, la existencia de disposiciones contradictorias y, por otra, la presencia de errores aritméticos o por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que, en ambos casos, se encuentren en la parte resolutive o que influyan en ella.

En cuanto al segundo, en vigencia del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, la jurisprudencia consideró que se configura cuando existen yerros de cálculo, en las operaciones matemáticas, en la aplicación de las fórmulas actuariales o en las expresiones numéricas. Por ello, los errores aritméticos no cobijan los aspectos conceptuales que, con fundamento en la ley y los medios probatorios, el juez defina para proceder a realizar los cálculos. Ahora, la Ley 1563 dispuso que podían tratarse de errores en la parte motiva, pero condiciona a que influyeran en la parte resolutive.”

1.5.9. “Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento” (Ley 1563, 2012, art. 41, #9). “El artículo 40 y 42 de la Ley 1563 de 2012 desarrolla el recurso extraordinario de anulación, dicho recurso se podrá interponer dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del laudo o la de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición, ante el tribunal arbitral, posteriormente se correrá traslado por quince (15) días. Y dentro de los cinco (5) días siguientes, se remitirá el expediente a la autoridad judicial competente para conocer del recurso” (Ley 1563, 2012, art. 40).

De no ser presentado en el término señalado o no sustentarlo en las causales invocadas en la Ley la autoridad competente rechazará de plano el recurso.

“En caso de admitirse el recurso, se proferirá sentencia, dentro de los tres (3) meses siguientes. Durante el recurso no se suspenderá lo señalado en el laudo, salvo cuando la entidad pública condenada solicite la suspensión” (Ley 1563, 2012, art. 42).

Si prospere cualquiera de las 7 primeras causales, se declarará la nulidad del laudo. En los demás casos, este se corregirá o adicionará.

“La sentencia que anule el laudo total o parcialmente cumplido ordenará las restituciones a que hubiere lugar” (Ley 1563, 2012, art. 43)

“Así mismo procederá el recurso de revisión contra el laudo y la sentencia que resuelva sobre su anulación conforme lo indica la Ley y será excluyente del recurso de anulación” (Ley 1563, 2012, art. 45).

“Será competente para conocer del recurso extraordinario de anulación la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar en donde hubiese funcionado el tribunal de arbitraje. Y del recurso extraordinario de revisión de laudos la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia” (Ley 1563, 2012, art. 46).

“Cuando intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado” (Ley 1563, 2012, art. 46).

1.6 Exposición Del Comportamiento Histórico Del Objeto Del Problema De Investigación

Inicia cuando ETB interpone acción de incumplimiento contra Colombia, motivo que mediante un proceso de arbitraje que dio inicio el siete (7) de diciembre de 2004, el cual finalizó a favor de COMCEL, fue impugnado por el recurso de anulación, sin embargo este se declaró infundado por no haberse probado lo suficientemente las causales alegadas

Una vez conocida la decisión del TJCA, la empresa ETB interpuso recurso de anulación por la causal de interpretación prejudicial contra los 3 laudos arbitrales que habían resuelto la controversia. Sin embargo, el Consejo de Estado decide denegar el recurso y la solicitud de

interpretación prejudicial. Por lo anterior, ETB decide acoger al TJCA cuyo fin es que se pronuncie respecto a las actuaciones del Estado.

En consecuencia, el Tribunal Andino, establece correcto añadirse una nueva causal de anulación “consistente en la omisión del deber de solicitar la Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias andinas aplicables al caso, por parte del Tribunal de Arbitramento que tenga conocimiento del mismo”. Por tanto, manifiesta que no es concebible que el Consejo de Estado se haya sustraído de la obligación de subsanar el yerro procedimental sobre la omisión en que incurrió la justicia arbitral al no haber solicitado la interpretación prejudicial. Asimismo, resaltó que el árbitro al actuar en derecho tiene las mismas facultades y funciones que un juez nacional y que por tanto es autónomo e independiente en sus decisiones en lo que respecta a la jurisdicción ordinaria; por ende, está incluido en el concepto de juez nacional al que se refiere la norma, siendo obligatorio que solicitarán la interpretación prejudicial al tratarse de una controversia de interconexión y que está acogida dentro de la normatividad andina y por ello procede dicha impugnación, para anular los laudos arbitrales, como objeto de la presente.

Por consiguiente, en el artículo 111: “Colombia debe cumplir lo ordenado por la comunidad” (Decisión 500, 2001)

1.7 Marco teórico para la solución del problema

1.7.1. Improcedencia de la taxatividad en las causales de anulación. En Colombia, se ha venido manejando la tesis referente a que debe operar la nueva causal de anulación de la interpretación prejudicial del TJCA, donde autores como Alejandro Daniel Perotti (2001) afirma que

“La modalidad obligatoria de la consulta prejudicial andina encarna el nivel último y más importante de esta relación de cooperación. Su fundamento primario debe buscarse en las

consecuencias que para el derecho comunitario andino pueden surgir a partir de una irrevisable sentencia nacional que aplique o interprete de forma errónea el ordenamiento regional.” (p.17)

En otras palabras, Perotti concuerda con la línea de que si debe prevalecer la decisión del TJCA so pena de que se incurra en un error de carácter irreversible. Asimismo, Cubillos, Pachón, López (2014) manifiestan que

“Este criterio ha sido reiterado en gran parte por las sentencias que versan sobre interpretaciones prejudiciales, en las cuales el tribunal ha sostenido que el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena es de aplicación obligatoria para todos los miembros de la organización. Así el derecho comunitario andino cuenta con identidad y autonomía propia, lo que le permite prevalecer sobre los ordenamientos jurídicos nacionales, de tal forma que los Estados parte no pueden oponerse a él a través de medidas legislativas o actos jurídicos unilaterales” (PP. 148-169).

Además, es necesario destacar que los tribunales arbitrales que profieren laudos arbitrales en derecho, tal como lo establece el TJCA se equiparan con los jueces nacionales (Constitución Política de Colombia, 1991) y por tanto

“las consideraciones que han llevado al legislador a restringir la procedencia del recurso de anulación, aunque legítima, parecen desconocer una realidad inocultable: los árbitros también pueden errar en la interpretación y aplicación del derecho sustancial. Esta situación, que ha llevado a las partes a acudir a otros mecanismos para controvertir los laudos arbitrales, pone en evidencia la insuficiencia del recurso de anulación frente a la necesidad del Estado de garantizar el derecho fundamental del debido proceso.” (Uribe, D. C., 2013).

Sobre el particular expresa el Consejo de Estado, que los Tribunales de Arbitramento “que profieren sus decisiones en derecho, tienen la obligación, con el propósito de garantizar la eficacia y la aplicación uniforme del Derecho Comunitario Andino, de solicitar al TJCA la Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso concreto que se hubiere sometido al conocimiento y decisión del respectivo Juez o Tribunal, por manera que el incumplimiento de dicha exigencia del derecho comunitario andino, por parte del respectivo Tribunal de Arbitramento, constituye un yerro procedimental que afecta la validez del laudo correspondiente y abre las puertas a su declaratoria de nulidad.” (Alarcón Pérez, N., 2013).

El TJCA al emitir su decisión, realizó una interpretación extensiva donde a través de la sentencia 57 IP 2013 introdujo

“Una nueva causal de anulación de los laudos, al referirse específicamente a la ley 1563 de 2012 vigente en Colombia, que es la norma sobre arbitraje nacional e internacional, y asimilar el proceso arbitral a un proceso judicial de única instancia. Además, el TJCA estableció la posibilidad de que la interpretación prejudicial sea solicitada en el trámite del recurso extraordinario de anulación contra el laudo” (Marcel Tangarife Torres).

En consecuencia, “a través de la mencionada providencia, el Tribunal de Justicia creó una causal de anulación de laudos arbitrales nacionales e internacionales, particularmente en Colombia, adicional a las contempladas de manera taxativa en la Ley 1563 de 2012, toda vez que el incumplimiento por parte de los árbitros de solicitar la interpretación prejudicial es obligatoria y, de no efectuarse, ello da lugar a la anulación de estos.” (Martínez arcos, 2014)

“La jurisprudencia andina ha señalado que la sentencia dictada en única o última instancia por un juez nacional sin haber solicitado la interpretación prejudicial, cuando ésta es obligatoria,

es nula dado que se efectúa en contravención del debido proceso. Atendiendo al principio de aplicación inmediata, efecto directo y primacía, se considera que la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial, cuando es obligatoria, constituyen un requisito procesal previo de carácter imperativo y, por consiguiente, ineludible para que el juez pueda dictar sentencia. Por este motivo, de La jurisprudencia andina ha señalado que la sentencia dictada en única o última instancia por un juez nacional sin haber solicitado la interpretación prejudicial, cuando ésta es obligatoria, es nula dado que se efectúa en contravención del debido proceso. Atendiendo al principio de aplicación inmediata, efecto directo y primacía, se considera que la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial, si es obligatoria, constituyen una obligación previa de carácter imperativo y, por consiguiente, ineludible para que el juez pueda dictar sentencia. Por este motivo, de acuerdo con el TJCA, cabe demandar la nulidad.” (Altamirano asmat, 2015).

Contrario sensu, se ha venido desarrollando otra postura, la cual se basa en que si bien, es procedente y obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial por parte del juez nacional, es necesario que, si no se realizó por parte del juez o árbitro, la contraparte debe necesariamente manifestarse respecto a tal omisión, con el fin de no dilatar el proceso. Por ende, autores como Lorena Victoria Martínez Arcos (2014) en una publicación realizada por la Universidad de los andes, afirma:

“De la inobservancia de los árbitros de la obligación de solicitar al TJCA la interpretación prejudicial de normas comunitarias en el trámite arbitral, también se puede derivar otra causal de anulación referente a no adoptar ni acatar la interpretación prejudicial dentro del laudo arbitral, porque como se señaló previamente, al ser obligatoria la solicitud de interpretación esta debe ser incluida dentro de la decisión a proferir.” esto lo afirman conforme a sentencias y casos que se

han presentado, sin embargo consideran que: “No debe proceder la causal de anulación de laudos arbitrales derivada de la falta de interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando la parte que tenía que alegar dentro del trámite arbitral se abstuvo de hacerlo, porque como se anotó previamente, se estarían violando principios de orden constitucional. Por consiguiente, los efectos de la anulación del laudo deben ser los mismos de aquellas causales en las que se les exige a las partes alegar la omisión o defecto procesal dentro del mismo trámite arbitral para que proceda la causal de anulación del laudo.” (p. 30)

Cárdenas Mejía (2013) manifiesta que “ se desestima de plano aquellas causales que no estén expresamente señaladas, así como las orientadas a reabrir el examen de fondo, con fines de establecer si el tribunal acertó o no en la aplicación del derecho sustancial pertinente en el laudo, porque dispone la ley que la autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia ni calificará las motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo” (p. 267).

En otras palabras, hay dos posturas las cuales si bien concuerdan y convergen en que es obligatorio la solicitud de interpretación prejudicial por parte del juez o árbitro, discrepan en que las partes están obligadas a pronunciarse respecto a la omisión en que incurrió el juez, so pena de no proceder la causal de anulación.

Capítulo II. Conceptualización de la respuesta a la pregunta de investigación

2.1 ¿Cómo opera la taxatividad en las causales de anulación de laudos arbitrales con la implementación de la interpretación prejudicial del tribunal de justicia de la comunidad andina en Colombia?

La presente investigación procede del enfoque jurídico positivista cuyo propósito es analizar la normatividad que regula las causales taxativas del recurso de anulación de laudos arbitrales

frente al concepto del Consejo de Estado al implementar una nueva causal, la cual, hemos hecho alusión repetitivamente en la tesis.

Se afirma que la metodología de investigación que se ajusta para cumplir el propósito de la presente tesis es de carácter cualitativo, motivo que está orientada en el análisis y síntesis de la jurisprudencia mencionada a lo largo del mismo, partiendo de la base normativa nacional e internacional que regula los componentes aludidos en la sentencia, objeto de la investigación; perfeccionando sus características mediante teorías.

Lo anterior se ajusta netamente a un tipo investigación exploratoria, pues se enmarca en desarrollar una exhaustiva interpretación de la posición asumida por el Consejo de Estado al evadir la regulación de las normas implementadas en Colombia junto con aplicaciones teóricas para lograr una eficaz apropiación del conocimiento que se relaciona con la taxatividad de las causales de anulación de laudos de árbitros, ahondando la posición normativa, jurisprudencial y doctrinal.

Se usa como método teórico el análisis y síntesis, el cual se refleja en el transcurso de la realización de la tesis: ya que se realizó un análisis detallado y exhaustivo de un caso en particular, examinando una serie de hechos que incoaron la acción judicial y que por tanto desencadenó jurisprudencial, normativa y doctrinalmente diferentes posiciones las cuales han sido constatadas por el presente proyecto investigativo, equiparando las posturas de cada autor frente al problema jurídico acogido.

En el presente proyecto se tiene como base las fuentes primarias al utilizarse instrumentos investigativos como la entrevista a autoridades expertas en la materia. Asimismo, se emplearon

como fuentes secundarias el uso de información de teóricos y doctrinantes a lo que se refiere con tesis, monografías, textos y revistas científico-jurídicas.

Además, en lo que respecta a la técnica investigativa, se empleó en análisis de contenido de texto a través de fichas jurisprudenciales y doctrinales para recolectar información de carácter documental.

El presente se justifica por la importancia de analizar si realmente las causales de anulabilidad de laudos arbitrales son taxativas y asimismo de forma únicamente, porque conforme al concepto del Consejo de Estado, en el cual declara la nulidad de tres (3) laudos arbitrales, nos encontramos en una situación totalmente contraria y chocante con la normatividad. Así las cosas, es un proyecto que se enfoca desde la jurisprudencia, normatividad y teoría, es decir, de carácter analítico; con el propósito de determinar realmente la naturaleza de las causalidades.

2.2 Análisis ficha jurisprudencial

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------|---|
| Tribunal | Consejo de estado | Sala | Contencioso administrativo |
| Sección | Tercera | Subsección | C |
| Fecha sentencia | Veinticuatro (24) de noviembre de 2016 | Radicación | 11001-03-26-000-2015- 00015-00 (52992) |
| Consejero ponente | Jaime Orlando Santofimio Gamboa | Asunto | Recurso de anulación de laudo arbitral - sentencia |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---|
| Actor | Comunicación celular s.a. Comcel s.a. | Demandado | Empresa de telecomunicaciones de Bogotá s.a. E.S.P. Etb |
| Descripción caso | “resolver los recursos de anulación interpuestos por la convocada empresa de telecomunicaciones de Bogotá s.a. E.S.P. Etb y por el ministerio público contra el laudo arbitral dictado el 21 de octubre de 2014 por el tribunal de arbitramento (...) Con ocasión del contrato de interconexión suscrito el 13 de noviembre de 1998.” (Consejo de Estado, sección tercera, sala plena, 43281, 2012) | | |

2.2.1. Hechos. El 15 de diciembre de 2006 se profirió laudo a favor de COMCEL, conforme a que las partes de la presente jurisprudencia habían acordado mediante contrato celebrado el 13 de noviembre de 1998 que acudirían a un arbitro frente a cualquier controversia técnica, financiera, jurídica o comerciales, posterior a que se agoten otras instancias.

Sin embargo, ETB estando en total desacuerdo con la decisión que declaró el pago de cargos de acceso conforme a la resoluciones dictadas por la Comisión de regulación de comunicación y la diferencia de lo que debe en su pago entre enero del 2002 hasta el 2004, interpone recurso de anulación el 22 de diciembre de 2006 por las causales: objeto o causa ilícita, no haber fallado en derecho, errores aritméticos y por haberse concedido más de lo pedido, pero este fue sin fundamento por el (Consejo de Estado, sección tercera, 2008.)

Empero, (El Consejo de Estado, sentencia el 9 de agosto, 2012) declaró: “dejar sin efectos la sentencia que declaró infundado el recurso de anulación; la nulidad del laudo arbitral dictado el

15 de diciembre de 2006; y devolver la plata pagada por ETB a COMCEL en el término de cinco (5) días e indexada.” Esto anterior, con motivo que ETB inició una acción de incumplimiento porque el tribunal no solicitó la interpretación prejudicial, por ello el (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia el 26 de agosto de, 2011) en el que “aclaró las acciones que debe hacer el Consejo de Estado y ordena a Colombia cumplir la decisión 500.”

Por consiguiente, COMCEL, solicita el 21 diciembre de 2012, al tribunal reconstruir todo el proceso y procediera previo al cumplimiento de la sentencia dictada el 9 de agosto. aunque ETB mediante las excepciones presentadas el 9 de agosto 2013 manifiesta el total desacuerdo con fundamento en: no es legítimo para solicitar el cobro de lo no debido, es inviable por desviación de sentencia de anulación del Consejo de Estado; por falta de jurisdicción y competencia acorde al contrato celebrado entre las partes el 15 diciembre, pues se estipulo en el mismo que primero iba a conocer la comisión de regulación de comunicación y posteriormente el tribunal de arbitramento; por falta de legitimación por activa; y por último por caducidad.

Los árbitros a cargo en el Tribunal, proceden en solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de la Comunidad, quien dictó sentencia el 13 de mayo de 2014 y posterior a ello, el 21 de octubre de 2014 se desestiman excepciones y se obliga a pagar nuevamente.

Sin embargo, la Agencia Nacional de defensa y el Ministerio Público, solicita aclaración del laudo por los siguientes motivos: aclarar cómo hicieron la adopción de la interpretación prejudicial por el TJCA; corregir el laudo porque cuando no hay temeridad no se puede condenar nuevamente; asimismo aclarar porque se condenó por incumplimiento contractual cuando eso no estaba en las solicitudes de COMCEL. Frente a las circunstancias que se manifiestan ETB insiste el 28 de octubre de 2014 que declare la nulidad del mismo por falta de competencia, sin embargo, se desestiman todas las solicitudes por auto del 30 de octubre de 2016.

2.2.2. Problema Jurídico. ETB y el Ministerio Público, hicieron alusión a tres causales únicamente para declarar la nulidad del laudo arbitral con las siguientes justificaciones:

Causal de falta de competencia, fundamentada en el acuerdo firmado por las partes y en la sentencia dictada por el Consejo de Estado el 13 mayo de 2014 al aplicar la interpretación prejudicial; manifiestan que ante cualquier conflicto, ETB y COMCEL, iban acudir principalmente a la autoridad de comunicaciones y al agotar diversas instancias si podían requerir el tribunal de arbitramento, objeto que no se cumplió; por ello, el Tribunal de Arbitramento no tenía competencia, sin embargo la misma no se manifestó sobre este causal precisamente.

No haber fallado en derecho, motivo que las resoluciones que COMCEL solicitó aplicar adquieren la figura de ser declaradas su nulidad y asimismo esta afirmación fue corroborada por el Consejo de Estado, Frente a ello el Tribunal de Arbitramento afirma que no tuvo en cuenta dicho análisis, razón que él no tiene ningún conocimiento de alguna clase de proceso que declara la nulidad de dichas resoluciones

Se concedió más de lo pedido, pues el laudo arbitral evidentemente se formó de carácter excesivo e inconexo puesto que se evidencio al declarar el incumplimiento de los cargos impuestos anteriormente por ETB, declaración que no fue solicitada por COMCEL

2.2.3. Ratio Decidendi

a. “naturaleza del recurso de anulación de laudos arbitrales” (Consejo de Estado, sección tercera, sala plena, 43281, 2012): Como se resalta en el presente trabajo y como el Consejo de Estado se ha pronunciado en varias ocasiones, se ha ratificado la observancia de afirmar que las causales de nulidad de laudos arbitrales son de carácter taxativos y procederá únicamente por

vicios procedimentales y no de juzgamiento, con el propósito de proteger el derecho al debido proceso; los cuales deberá sustentar respectivamente ajustándose el recurrente a la causal que realmente estructure su impugnación.

Por ello no podrá estudiar la instancia judicial: estudio o análisis de fondo; revivir debate probatorio del trámite arbitral; cuestionar razonamientos jurídicos; valoración probatoria.

b. derecho comunitario andino: Es una relación entre el Estado y el factor internacional con el propósito de dirigir: procesos unificados o armonizados; desde el orden en lo económico, jurídico, político

Conformado por los Principios:

- Supranacionalidad: Es cuando se está sobre la nación, en este caso en concreto los órganos internos de cada país debe estar acorde a la normatividad comunitaria autónoma. Así las cosas esto limita sus decisiones por comprometerse internacionalmente mediante un tratado; pues en este caso en concreto Colombia decidió confiar en las decisiones de la comunidad, lo que implica en aplicarlo por la atribución que le confirió.
- Integración con el sistema interno: pues el orden jurídico de la comunidad tiene fuerza vinculante con el sistema normativo interno de los países miembro, adquiriendo derechos y contrayendo la obligación de aplicar la normatividad comunitaria sin contradecir ninguno de sus principios, normas o propósitos; quiere decir que no habrá obligación de derogar en caso de que se contradiga, pero si tendrá limitaciones el Estado, al aplicar las normas cuando estas irrespeten a la comunidad andina o de lo contrario procederá la acción de incumplimiento.

Existe una coexistencia entre el derecho comunitario y andino, los cuales deben ajustarse para su armonía, entonces si existe un conflicto entre ellos dos; no se podrá fundamentar el país

miembro en su no aplicabilidad por su derecho constitucional o interno, porque eso apoyaría la burla al derecho internacional; sino que se deberá: analizarse la norma superior e inferior que ninguna de las dos lleve a cabo la derogatoria de la otra, quiere decir, se aplica la regulación comunitaria sin que conlleve a derogar la interna (principio de autonomía), pues Colombia reconoce la comunidad como vinculante y de primordial aplicación, de carácter limitado (principio de primacía y aplicabilidad).

- Aplicabilidad y efecto directo o inmediato:

Para que se efectivice la aplicación directa, debe ser de carácter restrictivo y estricto, para que las normas de la comunidad penetren en norma interna, sin requerir de una regulación interna para su aplicación, sino únicamente con la aceptación del tratado y el no desconocimiento de las normas de la comunidad. Así mismo, para que el resultado sea de carácter directo, este tendrá relación con los derechos que tienen los agraciados de la misma al exigir al país la aplicación de norma comunitaria.

- Intangibilidad y autonomía:

La autonomía es cuando los órganos de la comunidad son independientes al componer sus autoridades y normatividad, con el propósito de cumplir sus funciones al servir a la armonización de los países miembros, lo cual se refleja en: normas constitutivas, es el contenido del tratado que regula el procedimiento, requisitos, características, para crear normas, normas fundamentales, normas que deben ser aplicadas por las países que se formulan autónomamente requiriendo de una incorporación expresa; actos o decisiones de órganos comunitarios, los cuales interpretan las normas del ordenamiento andino; derecho interno, es como los países aplican sus normas.

Quiere decir que su alcance normativo a los países miembros en su regulación interna debe ser de carácter inmediato y eficaz su aplicación, cabe aclarar que este mismo no tiene prevalencia sobre la Constitución sino prioridad a la función integradora, pues tiene un contenido económico y no de derechos humanos y pese a que este no tiene obligatoriedad mediante el bloque de constitucionalidad, el Estado tiene un compromiso de cumplir las promesas internacionales a las que se adhirió.

Sus características:

- Regional.
- La comunidad andina es quien regula su normatividad.
- Sus propósitos se consagran en tratados constitutivos (sistema jurídico obligatorio para los Estados).
- Realización de normas (que mantengan la integración).
- Rama del derecho internacional (de carácter monista y no dualista, es decir, la normatividad es de carácter completo y es base suficiente para cada país, para cumplir el propósito en este caso de la comunidad andina, con solo la observancia de su orden jurídico, sin tener la necesidad de implementar una norma interna para su cumplimiento).

Jurisdiccionalmente hablando debe de existir un tribunal para que atribuya opinión sobre las normas comunitarias (interpretación prejudicial) y una corte que haga juicio de las normas demandadas (acatar la interpretación que se hizo)

Ahora bien, es importante analizar las decisiones del TJCA que se caracteriza:

- Órgano principal de la comunidad andina.

- Asegura el respeto al tratado firmado por la comunidad.
- Dirime conflictos susceptibles de la aplicación de las normas de la comunidad.
- Actúan autónomamente e independientemente.

Los pronunciamientos que efective la TJCA serán de aplicación directa, como se mencionaba anteriormente, como los procesos que se declara el incumplimiento de un país, este deberá continuar con las medidas necesarias para que se conceda el derecho del accionante, es ahí cuando se refleja la operatividad directa de la comunidad andina hacia el país miembro. Sin embargo, en el caso que no haya cumplimiento por parte del País, se podrá iniciar proceso sumario, ordenando unas respectivas sanciones que pueden ser:

- Autorizar países miembros para gravar adicionalmente un 5% las importaciones de cinco productos.
- La orden de introducir limitaciones respecto de las normas de origen o suspensión de la emisión de certificados de origen.

c. “Anulación del laudo por competencia” (Consejo de Estado, sección tercera, sala plena, 43281, 2012) Primeramente, afirma que el tribunal de arbitramento tiene función jurisdiccional, motivo que tiene como objetivo administrar justicia. Sin embargo, no existirá jurisdicción por el mismo cuando haga alusión a un tema que las partes no habían solicitado resolver o cuando no exista pacto arbitral.

Conforme a lo anterior, se extrae la competencia, la cual se atribuye a determinados órganos o instituciones para diriman conflictos, pero esto se determina con unos asuntos especiales; conforme al arbitraje, se distingue que las partes son quienes escogen a sus jueces arbitrales, sin

embargo no existía competencia por el mismo cuando resuelva asuntos que la ley no le otorga como facultad para pronunciarse sobre ellos.

Los requisitos para que esta causal sea válida como anulación de laudo arbitral son:

- Se haya alegado en el trámite arbitral, mediante impugnación al auto de asunción de competencia.
- Que los asuntos que conoció tribunal si se hayan acordado.

d. Anulación del laudo por falla en conciencia o equidad debiendo ser en derecho:

Inicialmente equidad quiere decir: dar a cada quien lo que le corresponde bajo una igualdad en un caso concreto, sin aplicar la ley, porque de lo contrario vulneraría el debido proceso buscando una solución al caso, sin exigir la motivación, pero este procede cuando las partes lo soliciten.

Se entenderá que fallar en conciencia cuando hay existencia de lagunas normativas, por lo tanto, el árbitro se basa en una convicción.

Se procederá a fallar en derecho cuando sea para resolver controversias contractuales, exigiendo está que sea motivadas basándose en los hechos, en las pruebas y en las normas.

Por lo anterior, se deduce que se configura esta causal, cuando el árbitro debió fallar en derecho y de lo contrario fallo en equidad, quiere decir esto, que existiendo una norma que regule el caso, decidió omitir y por su convicción, decidir; por otro lado, sin autorización de las partes para fallar en equidad lo hace.

e. Anulación del laudo por incongruencia: Solo se configura en 3 casos:

- Extra petita: Se decide sobre algo diverso a lo que se solicitó inicialmente.
- Ultra petita: Se favorece a la parte en situaciones o asuntos demás, sobre lo que se pidió.

- Citra petita: No se pronuncia sobre todas las pretensiones o únicamente se pronuncia de las excepciones.

f. Caso concreto: Alegaron falta de competencia en consideración de la interpretación prejudicial por TJCA, por lo cual debe examinar lo siguiente:

a. Características de la interpretación prejudicial y el derecho comunitario andino:

Ya teniendo en cuenta las características y principios del derecho comunitario, se debe saber que la interpretación prejudicial es un instrumento que los países miembros requieren para que exista armonización y coherencia el sistema comunitario andino, para así interpretar el ordenamiento jurídico, esta se efectiviza mediante dos modalidades:

- Obligatoria: es deber de las instancias judiciales (jueces de única o segunda instancia y los jueces arbitrales) o solicitud de parte, cuando: el recurso no es susceptible en la normatividad interna; para proteger el derecho comunitario; y cuando no se falló en derecho. Para que el fallo sea válido o de lo contrario se dictará la nulidad del mismo. La interpretación que haga el TJCA deberá acatarlo el juez correspondiente para el fallo.

No obstante, la sentencia afirma que:

“Se debe declarar la nulidad de la sentencia o laudo que no haya dado lugar a la interpretación prejudicial obligatoria, de manera tal que, para todos los efectos jurídicos, este supuesto se subsume como una más de las causales de nulidad o anulación consagradas en la normatividad interna. Se advierte que misma consecuencia ha de pregonarse al evento en el cual pese a solicitarse la interpretación prejudicial el Tribunal de Arbitramento no aplicó ésta a la hora de dictar el laudo que zanjó la contienda El Consejo de Estado, independientemente

de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última o única instancia, en este caso el Tribunal de arbitramento, cumplió con su obligación de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito total.” (Consejo de Estado, sección tercera, sala plena, 43281, 2012, pp. 66 – 67)

b. Pretendido por la parte convocante:

La parte tenía como pretensión principal: “obligada a pagar a la primera por concepto de Cargos de Acceso los valores establecidos bajo la opción 1: Cargos de Acceso Máximos por Minuto, previstos en las Resoluciones CRT 463 de 2001 y CRT 489 de 2002. Por consiguiente, pidió se condenará a ETB al pago de la diferencia entre lo que ésta ha venido pagando y lo que ha debido pagar.” (Consejo de Estado, sección tercera, sala plena, 43281, 2012, pp. 66 – 67)

c. Si se debía realmente satisfacer la interpretación prejudicial ante el TJCA.

Lo que realmente origina el pleito es la ausencia de solicitar la interpretación prejudicial ante TJCA, pues todo inició cuando acudieron al Tribunal de Arbitramento, el cual terminó con un laudo arbitral. Pero ETB insistió en interponer recurso de anulación.

A continuación, ETB interpone acción de incumplimiento, en el que el TJCA, declarando a lugar la demanda por no solicitar la interpretación prejudicial de los tres laudos arbitrales. Por

ende, declaró la nulidad de los laudos y dejó sin efecto las sentencias mediante sentencia 13 de mayo 2014, proceso que fue grato por los árbitros.

d. Analizar los laudos.

Sentencia 13 mayo 2014 dictada por el TJCA, la cual analizo:

- Autoridad competente para resolver conflictos: Es la autoridad de comunicaciones la competente para resolver estos conflictos.
- Interpretación prejudicial facultativa y obligatoria.
- Preferencia y necesidad: Debe prevalecer la norma de la Comunidad Andina; sin que exista contradicción alguna entre la norma interna y la norma de la Comunidad Andina. Asimismo, si el país interno tiene regulación sobre la interconexión de telecomunicaciones, podrá aplicarla siempre y cuando no sea contradictoria con la Comunidad Andina.
- conflictos de interconexión. Cuando exista un conflicto entre operadores locales, será la autoridad nacional competente para dirimir las controversias.
- Sistema para remunerar a los operadores de telecomunicaciones.
- pacto previo y posterior al contrato: el objetivo es analizar la forma en que se empleó al suscribir el contrato cada principio

La sentencia del 25 de agosto 2014, la sentencia del 20 febrero 2015, el laudo arbitral del 12 octubre 2014, estuvieron de acuerdo a la afirmación que desarrolla la sentencia anterior conforme a la autoridad competente para el caso concreto y la importancia de cumplir el requisito de solicitar la interpretación prejudicial

El Tribunal por ende ordenó constituir un nuevo laudo arbitral por no solicitar la interpretación prejudicial.

Ahora bien, la prosperidad de la causal invocada, la sala haya la razón de que la autoridad competente es la CRC y, por ende, si es aplicable la norma comunitaria, implementando las siguientes reglas:

- Será competente la autoridad de telecomunicaciones se extiende a todo lo relacionado con contratos de interconexión.
- Deberán intentar las partes un arreglo directo.
- Podrán acudir a elementos para dirimir controversias jurídicas siempre y cuando sea antes de la ejecución del contrato o de lo contrario se declarará su nulidad.

Conforme a la interpretación prejudicial se cumplió cuando se le ordenó al Consejo de Estado aplicar las normas comunitarias. Sin embargo, este no se desarrolló adecuadamente pues el Tribunal de Arbitramento, contradijo totalmente su análisis afirmando que esas no eran las normas correctas para analizar, sin perder de vista que los laudos que se dictaron fueron por no cumplir el proceso de solicitar la respectiva interpretación, desconociendo el sistema jurídico de la comunidad.

Para terminar no condeno en costas, pero resolvió anular los laudos arbitrales que existió entre las partes del presente, por todo lo manifestado.

2.3 Análisis ficha doctrinal # 1.

| | |
|---|--|
| Documento: | “Sobre la inobservancia de la obligación de solicitar en el trámite arbitral la interpretación prejudicial de normas comunitarias al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. |
| Autor: | Lorena Victoria Martínez Arcos |
| Edición: | Revista de Derecho Privado, núm. 52, julio-diciembre, 2014, |
| Ubicación: | Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia |
| # de páginas: | 1 - 35 |
| Referencia bibliográfica según norma APA | “Martínez Arcos, L. (2014). Sobre la inobservancia de la obligación de solicitar en el trámite arbitral la interpretación prejudicial de normas comunitarias al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Revista de Derecho Privado, (52), 1-35” |

2.3.1. Análisis del contenido. Dentro del Proceso N° 03-AI-2010, en el cual se desarrolla el presente artículo, y partiendo del “Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina” (Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina), Artículo 128 de las Obligaciones especiales y derechos en relación con la interpretación prejudicial, Los Países Miembros vigilarán el acatamiento y la observancia de los jueces nacionales frente a la interpretación prejudicial. Así como el derecho que tienen los mismos a acudir ante el órgano andino, por medio de la acción de incumplimiento, en el momento que las autoridades judiciales nacionales se abstenga a realizarla, o cuando, no se tenga en cuenta la interpretación ya proferida. De lo anterior se infiere que de no solicitar dicha interpretación se procedería a una

equivocación de carácter procedimental que perjudica directamente la validez del laudo; a lo cual le procede el recurso extraordinario de nulidad.

El artículo muy acertadamente menciona la providencia del 2012, por la cual se introdujo la causal de nulidad por no solicitar la interpretación prejudicial, causal que no incluye el Estatuto nacional que regula el arbitraje “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”. Generando evidentes controversias en el proceso, primero se parte del artículo 11 del mismo estatuto. Frente a la perturbación, en donde no se contempla su posibilidad en el proceso principal, hasta que se emita la interpretación que debe realizar el órgano andino desde el punto de vista prejudicial, como se regula en sus normas, de igual forma en el artículo 42 inciso tercero indica que: “La interposición y el trámite del recurso extraordinario de anulación no suspende el cumplimiento de lo resuelto en el laudo, salvo cuando la entidad pública condenada solicite la suspensión.”. Segundo, El Consejo de Estado afirma que la nueva causal podría proceder de oficio, no obstante, según el artículo 40 y 42 de la norma que emite Colombia para regular el arbitraje, indica que el trámite del recurso será interpuesto por las partes y no de oficio. Tercero, las causales del recurso son taxativas. Y finalmente según el Tribunal Andino, el juez que tramite la anulación podrá pronunciarse de fondo y librar sentencia sustitutiva, siempre que solicite interpretación prejudicial, esto último contrario al artículo 42 inciso final el cual indica que: “La autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.

Ahora bien, es importante aclarar que La Comunidad Andina, es una organización internacional que tiene como propósito velar por el desarrollo de los programas económicos que

contribuyen a la progresividad de los países miembros, una de las instituciones que ayuda a garantizar el cumplimiento de dicho objetivo es el Tribunal de la comunidad, que según el presente artículo cabe destacar cuenta con “La competencia para conocer de las acciones de nulidad, incumplimiento y laborales, así como también para resolver las solicitudes de interpretación prejudicial, los recursos por omisión y para ejercer función arbitral.”

Por otra parte, la interpretación prejudicial, se entenderá como el instrumento de los jueces nacionales para solicitar a las instituciones de vigilancia y cumplimiento del derecho comunitario a contribuir en la correcta aplicación e interpretación del mismo. Según la (Resolución 210 de la Secretaría General de la Comunidad Andina) “la interpretación prejudicial tendrá la naturaleza de incidente procesal de carácter no contencioso y podrá ser obligatoria o facultativa, teniendo en cuenta si el tema o caso en concreto permite dentro del ordenamiento interno un recurso ordinario que permita reevaluar la decisión.” Es menester reiterar que durante el periodo de emisión de la interpretación el Juez nacional decretará auto que suspenda el proceso y genera así mismo la obligación de aplicar el resultado de la interpretación.

El presente artículo cita “los procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007” (Martínez Arcos, L., 2014) enunciando que el órgano jurisdiccional andino amplió el concepto de quienes podían solicitar la interpretación, oportunidad en que añadió a las autoridades que tienen facultades jurisdiccionales desde el punto de vista administrativo como lo son los tribunales de arbitramento cabe destacar que lo anteriormente mencionado es debido a que los árbitros cuentan con facultades de los jueces ordinarios a la hora de dirimir los conflictos planteados.

Por lo anterior se establece que la interpretación prejudicial será de obligatorio cumplimiento cuando se trate de un proceso de única instancia o de laudo que no posea recurso alguno, y en garantía de ello el (artículo 128 del estatuto del tribunal de justicia de la Comunidad Andina),

“instituye la procedencia de la acción de incumplimiento en donde el juez se abstenga de su deber, no obstante este deber de solicitar la interpretación prejudicial debe ser debidamente sustentado y motivado por el juez solicitante.”

En lo referente al fundamento constitucional cuando consagra el arbitramento como aquel instrumento funcional que tiene como propósito disipar controversias nos ubicamos en el artículo 116, en el cual la constitución otorga la facultad a particulares transitoriamente de la función administrativa, para fallar en derecho o en equidad sobre las controversias que se presenten entre las partes. Por consiguiente y al igual que un pronunciamiento judicial le será procedente la revisión vía acción de tutela, como recurso extraordinario tendrá el recurso de anulación, que según la Ley 1563 de 2012 artículo 41, sólo se podrá presentar en los postulados allí consignados, en donde se limita tanto a las partes como al juez en la observancia de errores de procedimiento y no de fondo, por no ser considerado como una segunda instancia de la decisión proferida por tribunal de arbitramento.

Este artículo, al igual que la presente tesis trae a colación el caso entre Comcel S.A y ETB, el cual tiene en cuenta las normas que regulan la jurisdicción andina, desarrollan la obligatoriedad de solicitar la interpretación prejudicial para dar eficaz cumplimiento al derecho comunitario, so pena de incurrir en un error de procedimiento y por ende poder someter el laudo al recurso extraordinario de anulación y adicionalmente agrega que este podrá ser de oficio o por las partes. Es evidente la moción de agregar esta última como una nueva causal al ordenamiento Colombiano sustentada en la primacía y aplicación directa del derecho comunitario, es preciso aclarar que dicho postulado es adicionado no por normativa si no por una decisión de la Comunidad Andina. Así como precisar los conflictos y controversias que se presentan con la

nueva causal y el ordenamiento nacional: Artículos 40, 41 y 42, que plantean la taxatividad de las causales, la suspensión de los efectos del laudo y quiénes pueden interponer el recurso.

Para concluir el presente artículo afirma que Colombia se debe tener en cuenta como aquel país, parte de la comunidad, que más ha solicitado al tribunal interpretaciones prejudiciales, lo que permite inferir que Colombia es uno de los países que le es más fiel a los lineamientos del derecho comunitario y que la aplicación del mismo aun cuando cuenta con el carácter vinculante no es uniformemente en los países miembros.

Toda vez que la nueva causal es contraria e inexistente en el ordenamiento interno, se crea la necesidad de subsanar dicho vacío por parte del legislador colombiano, siempre y cuando no contrarié el derecho comunitario, así como establecer la fundamento de la obligatoriedad de la atención a la interpretación atendiendo a los principios de seguridad jurídica, buena fe y lealtad procesal de las partes, en cada caso en concreto.

2.4 Análisis ficha doctrinal # 2.

| | |
|----------------------|---|
| Documento: | “Cooperación Judicial Internacional Iberoamericana: La Interpretación Prejudicial Andina: ¿Mecanismo de cooperación o instrumento de inferencia en procesos judiciales y arbitrales?” |
| Autor: | Marcel Tangarife Torres |
| Edición: | Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal |
| Ubicación: | Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Bogotá, Colombia. |
| # de páginas: | 207-230 |

| | |
|---|--|
| Referencia bibliográfica según norma APA | <p>“Tangarife Torres, M. (2016). Cooperación Judicial Internacional Iberoamericana: La Interpretación Prejudicial Andina: ¿Mecanismo de cooperación o instrumento de inferencia en procesos judiciales y arbitrales? Revista del Instituto de Derecho Procesal, 206-230”</p> |
|---|--|

2.4.1. Análisis jurídico. El artículo que se colige describe la forma en que se ha venido desarrollando la interpretación prejudicial por parte del TJCA desde el año 2012, ampliando su alcance y estableciendo lo siguiente:

En primera medida, sostiene que la interpretación prejudicial se pueda tramitar a través de los recursos ordinarios, esto es, para los casos donde haya primera y segunda instancia, excluyendo así tramitarse a través del recurso extraordinario de casación y revisión.

En segunda medida, amplió las causales de anulación establecidas en la Ley 1563 de 2012, a través de la sentencia 57-IP-2013 integrando así la interpretación prejudicial como nueva causal, la cual puede tramitarse a través del mecanismo de impugnación contra laudos arbitrales para que se declare su nulidad. Así mismo, extendió el concepto de juez nacional, incluyendo de esta manera a los procesos arbitrales.

Por lo anterior, la omisión de solicitar la interpretación prejudicial en los procesos de única instancia o donde no haya cabida de los recursos ordinarios, genera nulidad y así mismo la anulación del laudo. En consecuencia, el autor procede a preguntarse si

“¿la interpretación prejudicial del TJCA es un mecanismo de cooperación entre los jueces y tribunales nacionales y dicho órgano comunitario andino para promover la adecuada administración de justicia? ¿La extensión de esta figura a casos no previstos expresamente en las

normas andinas se constituye en un instrumento de interferencia que afecta los procesos judiciales nacionales?”

Para resolver los anteriores interrogantes, Tangarife aclara que según el Artículo 121 de la Decisión 500, el TJCA solo es competente para interpretar las normas de la Comunidad andina y su debida aplicación y, por tanto, el juez nacional es obligado a seguir la interpretación prejudicial, so pena de que se incurra en un error de derecho, lo cual pueda ser corregido o subsanado por el superior jerárquico en el caso en que proceda recurso ordinario.

Por lo anterior, y en contra posición de nuestra hipótesis, es menester observar que el autor centra su tesis en que el TJCA no tiene competencia para interpretar las normas del ordenamiento interno de los países miembros como tampoco los hechos de los cuales conoce el juez nacional o árbitro, quien es el llamado a resolver el caso, argumentando que, el TJCA debe limitarse única y exclusivamente a interpretar lo concerniente a la normatividad andina. En consecuencia, cuando no haya controversia sobre una norma andina no es necesario aplicar la interpretación prejudicial por ser ésta solamente un mecanismo de cooperación judicial cuyo fin no es otro que el de dar una aplicación adecuada de la norma supranacional.

Ahora bien, respondiendo al interrogante el autor argumenta que, con base en la Sentencia 3-AI-2010 y en la providencia aclaratoria del 15 de noviembre de 2011, donde se establece:

“por tanto, si los árbitros tienen funciones jurisdiccionales y actúan en última instancia y no dependen de los jueces nacionales; (SIC) para los efectos de la norma comunitaria actúan como jueces nacionales, es decir, de acuerdo con la interpretación extensiva están incluidos dentro del concepto de juez nacional los árbitros que decidan en derecho, luego, deben solicitar la

interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de manera directa, sin que sea necesaria la participación o mediación de organismos judiciales”

En otras palabras, el TJCA estableció como semejantes al proceso judicial con el proceso arbitral sustentado en el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, extralimitándose de su competencia al interpretar el ordenamiento jurídico nacional, ya que en ninguna norma de la Comunidad andina se expresa la obligación hacia los tribunales conformados por árbitros de solicitar la interpretación prejudicial.

Además, el texto trae a colación el Asunto 61/65 (1966) *Vassen Gobbels* donde el Tribunal de las Comunidades Europeas definió los límites del concepto de órgano jurisdiccional estableciendo como criterios los siguientes:

“(i) El órgano debe tener por origen la ley. En este caso, el Tribunal de arbitramento tiene como causa la voluntad de las partes, que se manifiesta a través de la cláusula compromisoria y el compromiso, por ende, el autor considera que no es posible que el Tribunal Arbitral esté obligado a solicitar la interpretación prejudicial”

“(ii) El órgano debe tener un carácter permanente. En los tribunales de arbitramento, estos se caracterizan por ser de carácter temporal o transitorio, es decir, que una vez resuelto el litigio se extingue”

“(iii) El carácter obligatorio de su jurisdicción. El autor concuerda con que, al nacer el Tribunal de arbitramento por la voluntad de las partes, no se cumple con este criterio”

“(iv) que exista una controversia”

“(v) que la decisión que se profiera fuese en derecho”

Lo anterior, para hacer énfasis en que el Tribunal de Arbitramento no puede ser equiparado con los jueces nacionales por no cumplir a cabalidad con cada uno de los criterios anteriormente mencionados.

Asimismo, el autor menciona que en la sentencia 57-IP-2012, el TJCA hace una interpretación extensiva en lo que se refiere a la normatividad interna del Estado colombiano, modificando el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 ya que incluye a la interpretación prejudicial como una nueva causal para declarar la falta de validez de un laudo, modificando en cierta medida el recurso extraordinario de anulación, sin estar facultado de la función legislativa.

En contraste, Marcel Tangarife sostiene que (i) el TJCA no tiene la facultad de interpretar la normatividad nacional; (ii) como tampoco tiene la competencia para realizar una interpretación extensiva a lo que se refiere con la interpretación prejudicial y llevarla al campo de los recursos extraordinarios; (iii) y mucho menos tiene la capacidad legislativa de introducir, modificar o adicionar causales de anulación a la Ley 1563 de 2012. Por ende, el autor hace hincapié en que hay afectación al

“principio de soberanía nacional consagrado en el artículo 9º de la Constitución Política de Colombia y supera el ámbito del principio pacta sunt servanda en materia de cumplimiento de tratados internacionales”.

En conclusión, el TJCA se desbordó en su actuar al equiparar al juez nacional con el árbitro, introducir una nueva causal de anulación de laudos arbitrales y atribuirse facultades que le son propias al Congreso de la República.

En lo que respecta a la pregunta de si

“¿debe el juez o tribunal nacional aplicar la interpretación prejudicial del TJCA que excede las determinadas, limitadas y expresas atribuciones que le fueron asignadas en virtud del tratado de su creación y de la Decisión 500?”

El autor afirma en cuanto a que el Tribunal nacional debe acatar la interpretación prejudicial siempre y cuando:

- (i) El TJCA hubiese realizado una interpretación abstracta de la norma comunitaria andina
- (ii) El TJCA no hubiese interpretado normas nacionales.
- (iii) El TJCA no hubiese calificado los hechos que son sometidos a consideración del juez o tribunal nacional.

En consecuencia, la violación de alguno de estos criterios conlleva a que se afecte el principio de independencia de los jueces nacionales y asimismo una injerencia en la competencia de los mismos.

2.5 Entrevistas:

| | |
|--|---|
| Problema de la investigación: | La inoperancia de la taxatividad en las causales de anulación de laudos arbitrales con la implementación de la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad andina y su posterior similitud con el recurso de apelación. |
| Objetivo general de la investigación: | La entrevista tiene por objetivo evidenciar que las causales de anulación de los laudos arbitrales no son taxativas y operan no solamente por vicios de forma sino también de fondo. |

| | |
|---|---|
| Objetivo específico de la investigación: | La consulta al experto tiene como fin específico detallar la manera en que se ha venido desarrollando la implementación de la interpretación prejudicial por vía jurisprudencial. |
| Tareas correspondientes a la entrevista: | Implementación de las preguntas a los expertos, con el fin de llevar a cabo nuestros objetivos generales y específicos. |

| | |
|--|--|
| Nombre del entrevistado: | Dr. Fabián López Guzmán |
| Razones que determinan en interés de entrevistarlo para esta investigación: | El Dr. Fabián López es especialista en Derecho Comercial y Financiero, profesor y conferencista nacional e internacional en arbitramento, autor de múltiples libros entre ellos el Proceso Arbitral En El Derecho Contemporáneo. Por tanto, es una autoridad experta que nos brinda su conocimiento en cuanto a nuestro trabajo de investigación |
| Lugar de la entrevista: | Universidad Libre. Bogotá, Colombia. |
| Fecha y hora de la entrevista. | Septiembre 11 de 2018. 5:30 pm. |

Pregunta Introductoria

1. ¿Qué piensa usted de la supranacionalidad del Derecho Comunitario Andino y su obligatoriedad?

“El Derecho Comunitario Andino es una situación legal que viene desde hace mucho tiempo y obedece al principio de la primacía del Derecho Comunitario sobre el derecho interno, cuyos antecedentes se remontan a la sentencia del año de 1969 proferida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas; y que más tarde, fue acogido al Derecho Comunitario Andino. Por tanto, todas las disposiciones del TJCA tienen primacía sobre el derecho interno e inclusive sobre la Constitución Política de Colombia.” (Fabian Lopez, 2018)

Bloque Temático

2. ¿Qué piensa usted frente a que las causales de anulación de laudos procedan únicamente por vicios de forma y que con la introducción de la interpretación prejudicial como una nueva causal se trate un vicio de fondo?

Se ha venido discutiendo ese problema porque si bien, el recurso de anulación ataca aspectos puramente formales, lo cierto es que, por ejemplo, cuando se habla de una nulidad por violación al debido proceso o una nulidad por falta de interpretación, de alguna manera se afectan aspectos sustanciales o de fondo del proceso.

Entonces, en teoría se sostiene que, en el marco del recurso de anulación solamente se discuten aspectos puramente formales, pero en la realidad, a lo concerniente a un tema hermenéutico y de interpretación juegan muchos aspectos y, es ahí donde uno considera, por ejemplo, si la interpretación relativa a pruebas, al contrato o a sus características, si analiza aspectos de fondo.

3. ¿Está usted de acuerdo con el TJCA al introducir la interpretación prejudicial como causal de anulación de laudos arbitrales sin haberse alegado en el trámite arbitral?

En primera medida, hay que aclarar que la interpretación prejudicial es de carácter obligatorio por estar implementado en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina donde Colombia es Estado miembro. Por tanto, en el ámbito de los procesos judiciales, una causal de anulación es no haber realizado la interpretación prejudicial ante el TJCA en lo que respecta a los asuntos concernientes de la decisión 486 del año 2000.

Ahora, en el ámbito del arbitraje es claro que haya tenido que introducirse como causal porque el arbitramento no solamente está regulado por la ley 1563 de 2012, sino que existen otras normas que también lo regulan. Por ende, no se puede decir que, por no estar mencionada específicamente la causal en todo el estatuto de arbitramento, este no haga parte de las normas del arbitraje en Colombia, verbigracia del ordenamiento de la Comunidad Andina, del Código General del Proceso y de los demás tratados internacionales que ha suscrito Colombia en materia arbitral como lo es el Convenio de Washington de 1965 y la convención New York acogida por la Ley 39 de 1990.

En conclusión, no es cierto que se haya introducido una nueva causal porque está ya estaba en otros ordenamientos que han sido acogidos por Colombia. En contraste, lo que hizo el Consejo de Estado fue no legislar sino interpretar la norma, pero de una manera integral.

4. ¿Qué trámite procede cuando el juez nacional o tribunal no solicita la interpretación prejudicial obligatoria?

El juez nacional o Tribunal al omitir la solicitud de interpretación prejudicial, incurre en una causal de anulación conforme a la legislación interna y la legislación comunitaria.

| | |
|--|--|
| Nombre del entrevistado: | Dr. Pedro Elías Ribero Tobar |
| Razones que determinan en interés de entrevistarlo para esta investigación: | El Dr. Pedro Elías Ribero es abogado, árbitro de la Cámara y Comercio de Bogotá, profesor y conferencista nacional en Medios alternativos de conflicto. Por tanto, es una autoridad experta que nos brinda su conocimiento en cuanto a nuestro trabajo de investigación y la postura que tiene actualmente los árbitros e Colombia |
| Lugar de la entrevista: | Universidad Libre. Bogotá, Colombia. |
| Fecha y hora de la entrevista. | Septiembre 18 de 2018. 8:30 pm. |

Pregunta Introductoria

1. ¿Qué piensa usted de la supranacionalidad del Derecho Comunitario Andino y su obligatoriedad?

Al hacer referencia en particular al laudo de ETB vs Comcel particularmente me preocupa un punto en especial, y es que en los tribunales de arbitramento todo nace a través del pacto arbitral es decir, el acuerdo de voluntades de las partes y entonces cuando hay supranacionalidad en casos tan especiales como este ya que se está violentando el tema de que las partes desde el inicio decidieron no ir a donde un juez sino a lo que algunos llaman la jurisdicción de tribunales

de arbitramento. En consecuencia, se genera cierta incertidumbre a lo que hay certeza ahora, ¿Cuál es la certeza? si se pacta un tribunal de arbitramento el problema se resolverá ante este y se deberán cumplir las causales de anulación de la Ley 1563 de 2012 para que el tribunal cese las funciones. Por lo tanto, hay que preguntarse, en qué momento encajó una norma de derecho internacional público a afectar temas privados y la incertidumbre que puede generar no solo para las partes sino para la inversión extranjera.

Bloque Temático

2. ¿Qué piensa usted frente a que las causales de anulación de laudos procedan únicamente por vicios de forma y que con la introducción de la interpretación prejudicial como una nueva causal se trate un vicio de fondo?

Desde el inicio si hay tribunal de arbitramento es porque las partes así lo quisieron y por ende lo pactaron, es decir que nace de la voluntad de las partes. Asimismo, el legislador ha establecido que como nace de la voluntad de las partes se debe volver de única instancia, es decir, no tener doble instancia porque no tiene un superior jerárquico, pero hay que evitar que los laudos se puedan fallar sin límite alguno a través de los requisitos formales establecidos (causales de anulación). Por ende, si lo que se busca es atacar el fondo para eso existe el recurso extraordinario de revisión y no considero procedente que se haya introducido una nueva causal que no persigue el fin del recurso de anulación.

3. ¿Está usted de acuerdo con el TJCA al introducir la interpretación prejudicial como causal de anulación de laudos arbitrales sin haberse alegado en el trámite arbitral?

No estoy de acuerdo ya que en el recurso de anulación hay varias causales que establece que estas debieron alegarse en su momento, y es lógico, ya que si lo alegó al final estoy abriendo una

puerta a que el defensor haga lo que quiera y solo busque a través de maniobras que se anule el laudo.

2.6 Análisis Del Enfoque Jurídico Aplicado En Las Causales De Anulación De Laudos Arbitrales y La Interpretación Prejudicial.

Como anteriormente se ha descrito, el derecho Comunitario se integra como tratado internacional a nuestro ordenamiento jurídico y se rige bajo el principio de la supranacionalidad, esto claro sin abandonar la supremacía constitucional interna. Por lo anterior se les otorga la facultad a todos los ciudadanos de los países miembros, de solicitar a la autoridad competente nacional la aplicación del derecho comunitario.

Internamente Colombia a través del Estatuto que regula el arbitraje en Colombia, en donde establece el proceso arbitral, el laudo y los recursos procedentes contra este. El recurso de anulación por su parte es desarrollado como un recurso extraordinario el cual solo procederá por las causales allí expuestas, y en observancia a ello solo se podrá interponer dicho recurso por yerros procedimentales y no en relación a la decisión de fondo del laudo arbitral, atendiendo a que el recurso para que sea nulo el laudo arbitral no puede entenderse como una segunda instancia.

El tribunal de la Comunidad Andina en sus pronunciamientos ha dispuesto una obligación al Estado Colombiano que es la de solicitar la interpretación prejudicial a la autoridad Andina y así dar efectivo cumplimiento y actuar en concordancia con los principios del derecho Comunitario.

Existen tratadistas que indican que la interpretación prejudicial se introduce no necesariamente por la Ley 1563, que es considerada la fuente principal si no por tratados y normas internacionales que versen sobre arbitramento en Colombia. Teniendo en cuenta lo

anterior existe una evidente brecha en la aplicación de la Ley 1563 de 2012, por cuanto este estatuto enumera las causales en las que procede el recurso mencionado contra laudos arbitrales, y no menciona la interpretación prejudicial, como una de ellas.

Es por ello que resulta “improcedente el recurso invocando dicha causal”. Aun así el Tribunal Andino, manifiesta la necesidad de la causal de nulidad basada en la interpretación prejudicial, sustentada en la obligatoriedad del derecho comunitario y su aplicación directa. La comunidad Andina por otra parte deja de lado que dicha causal afectaría la naturaleza de la nulidad, por no poder esta pronunciarse de fondo y aun cuando se diga que la causal es por omitir el procedimiento de la solicitud de la interpretación, hay que destacar que es inevitable no modificar o intervenir en la resolución de fondo del laudo.

2.7 La interpretación prejudicial como causal de anulación enmarcada en el derecho interno y en el derecho comunitario.

Actualmente existe ambigüedad sobre la taxatividad de las razones emitidas por la ley para que se declare la nulidad de las decisiones emitidas por arbitros, porque aun cuando el Estatuto de arbitraje nacional e internacional, Ley 1563 es claro en sus artículos 40,41 y 42 de la causales precedentes, el TJCA ha establecido en sus pronunciamientos la interpretación prejudicial como requisito obligatorio por parte del tribunal de arbitramento nacional, en los casos que se solicite o sea necesario para dar cumplimiento a los principios del derecho comunitario.

En el caso de Comcel S.A y ETB, se determinó que el Estado Colombiano al ser parte de la Comunidad Andina debe actuar como juez (árbitro en sus funciones jurisdiccionales) y pronunciarse ya sea frente a la nulidad, por no haberse tramitado la interpretación prejudicial o de fondo implementando la interpretación emitida por el Tribunal que hace parte de la

Comunidad, atendiendo a la observancia que debe prevalecer del derecho que se regula por los órganos de la comunidad sobre el derecho interno.

El Doctor Fabián López, expone muy acertadamente que la naturaleza del recurso de anulación no constituye una segunda instancia, razón por la cual no debe debatirse aspectos de fondo del proceso arbitral y en caso de dicha necesidad y al igual que en otros países se deberá implementar la posibilidad de la interposición del recurso extraordinario de casación.

No obstante, reitera la obligatoriedad de la interpretación prejudicial, por ejemplo en lo referente a asuntos de la decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina. y que no solo se debe interpretar la Ley 1563, si no las demás disposiciones especiales de arbitramento internacional como en el tema de telecomunicaciones, afirma que no se trata de colegislar si no de atender al principio de uniformidad del derecho internacional.

Capítulo III. Validación de la hipótesis de investigación

3.1 Análisis Crítico Sobre Las Causales De Anulabilidad Del Laudo Arbitral

Los capítulos referenciados han ido estructurando el marco de la investigación jurídica planteada. De manera explicativa y hermenéutica se ha desarrollado el marco conceptual de los diferentes órganos e instrumentos jurídicos logrando así obtener una conclusión basada en los métodos cualitativos en referencia a la taxatividad de las razones para que se efectivice la anulación de un laudo con la implementación de la interpretación prejudicial como causal por parte del TJCA. Sin embargo, antes de aplicar la validación de la hipótesis conviene destacar algunas características contenidas en los capítulos anteriores.

En el primer capítulo se desarrolla y se abordan los conceptos en materia del derecho comunitario andino, sus características, aplicación, causales de anulación de la Ley 1563 de 2012

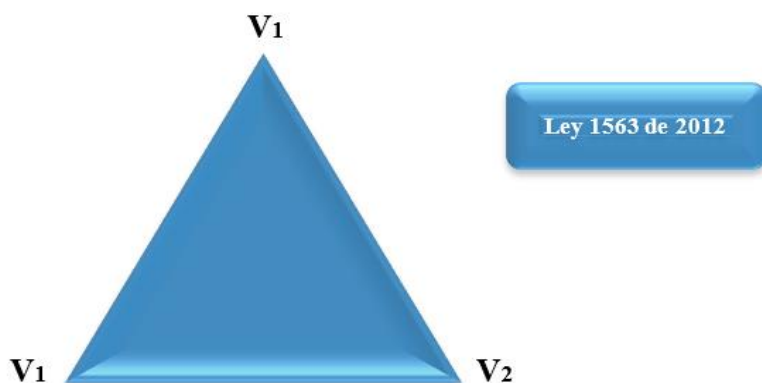
y el tema que versa nuestra investigación: la interpretación prejudicial. Además, se aporta el antecedente histórico que originó la implementación de una nueva causal por parte del TJCA, más las dos posturas que han venido tomando los doctrinantes en Colombia sobre el tema. En este análisis concluimos que la no solicitud de la interpretación prejudicial genera nulidad y por tanto causal de anulación del laudo arbitral y que con base en la doctrina actual, el recurso de anulación sobrepasa los límites de la formalidad para proceder igualmente por vicios sustanciales.

La relevancia del segundo capítulo emerge en que esclarece la inoperancia de la taxatividad de las causales de anulación, con base a una serie de técnicas que se utilizaron para obtener la información necesaria de expertos en materia de derecho comunitario andino y de arbitraje, cuyo estudio tiene origen en el caso de Comcel S.A y ETB, el cual nos llevó a conocer que, el Estado Colombiano al ser parte de la Comunidad Andina debe actuar con base en las normas supranacionales y pronunciarse frente a la omisión del tribunal conformado por arbitros al no solicitar la interpretación que exige la comunidad en cuanto a que sea prejudicial. Por ende, al no haberse tramitado la interpretación prejudicial por no ser causal de anulación, el TJCA la introdujo al ordenamiento jurídico nacional basándose en el principio de prevalencia, ya descrito anteriormente.

En consecuencia, al introducirse una nueva causal de anulación por parte del TJCA al ordenamiento jurídico nacional, la cual no tiene las características para serlo por tratarse de un vicio sustancial y de fondo; que no fue alegado dentro del proceso arbitral y que, fue denegado por parte del Consejo de Estado por no estar dentro de las causales del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 validamos nuestra hipótesis sobre la inoperancia de la taxatividad que hace referencia el

ordenamiento interno y el rompimiento de la estructura misma del recurso de anulación al operar por vicios de fondo y no de forma.

3.2 Triangulación Metodológica De La Investigación



V1: “El Consejo de Estado plantea nueva causal de procedencia del recurso de anulación de laudos arbitrales, consistente en la omisión de solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de la Comunidad Andina.” (Consejo de Estado, 43281, 2012)

V2: ¿Cómo opera la taxatividad en las causales de anulación de laudos arbitrales con la implementación de la interpretación prejudicial del tribunal de justicia de la comunidad andina en Colombia?

V3: “Sentencia del 9 de agosto de 2012. Radicado: 11001-03-26-000-2012-00020-00(43281), COMCEL S.A. en contra de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - E.T.B. S.A. E.S.P.” (Consejo de Estado, 43281, 2012)

Partiendo del análisis sobre la regulación del Arbitraje en Colombia y sus compromisos internacionales con relación al mismo tema, el recurso de anulación frente a laudos arbitrales

procederá por causales taxativas. Así mismo la ley advierte que dichas causales no podrán ser alegadas por motivos de fondo, sino únicamente por razones de forma. Bien se sabe que los árbitros no poseen la competencia para que una vez un laudo sea anulado, poder abrir un nuevo litigio sobre el asunto que ya fue dirimido por el panel arbitral. En efecto, la anulación de un laudo arbitral no puede ser tomada como la posibilidad de apertura de una segunda instancia.

En este punto resulta relevante recordar que el arbitramento, por su naturaleza de ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos, lo que busca es que las partes logren dirimir un conflicto donde haya un choque de intereses particulares, por medio de un tercero, evitando acudir a la jurisdicción ordinaria. Las partes haciendo uso de su libertad y autonomía para definir la forma de solventar sus diferencias, acuerdan por medio de un acta de compromiso llegar al consenso que, en la eventualidad de existir diferencias entre ambos, será un árbitro quien resuelva esas vicisitudes. Es así como logramos observar que el mecanismo del arbitramento no es algo impuesto a las partes, sino que surge de su libre voluntad.

Más allá que el panel arbitral sea conformado, por ejemplo, para dirimir conflictos derivados de un contrato de rango internacional, dicho proceder arbitral debe atender igualmente la normatividad jurídica de la jurisdicción en la que se encuentren. Esto lo podemos afirmar basándonos en el artículo 116 Constitucional donde se consagra que particulares podrán ser investidos de forma temporal con funciones, de las cuales, sea efectiva la justicia en cuanto a su administración, apartando el reconocimiento a que las partes tienen la voluntad de acudir a ella, para que en virtud de ello profieran fallos (laudos), siempre con arreglo a los términos que determine la ley respectiva que expida el Congreso de la República.

Sin embargo, no podemos pasar por alto lo establecido en el artículo 93 Constitucional que afirma que tanto los tratados como los convenios internacionales que hayan sido ratificados por

la máxima autoridad legislativa de nuestro país, esto es el Congreso de la República, prevalecerán en el orden interno. Esto es lo que se ha denominado por la doctrina como el bloque de constitucionalidad y conlleva a darle importancia de rango constitucional a los tratados y convenios anteriormente referidos. Es así como, y retomando el quid de nuestro caso en estudio, las normas de la Comunidad Andina entran a ser parte esencial de nuestro ordenamiento jurídico y somos responsables de la correcta aplicación de estas normas de carácter comunitario.

Esta relevancia del Derecho Andino dentro de la legislación colombiana se da en virtud de la ratificación por parte de nuestro Congreso de la República de convenios internacionales tales como el tratado suscrito con la comunidad y la normatividad que ellos han expedido y a las cuales Colombia se encuentra sujeto de carácter internacional. Esto en consecuencia conlleva a que en caso de diferencias entre una norma colombiana y una perteneciente al ordenamiento jurídico de la CAN, obligará a que se prefiera esta sobre aquella. Todo ello a raíz del principio de primacía del Derecho Comunitario Andino.

En este orden de ideas, los ciudadanos de los países pertenecientes a la Comunidad Andina se les ha otorgado el derecho a exigir a las autoridades de sus respectivas naciones y las instituciones conformadas para estos fines, y en cualquier momento, el pleno cumplimiento de todo derecho y garantía que se halle dentro de la normatividad jurídica de la CAN. Los organismos nacionales de integración mencionados en el presente párrafo son en Colombia el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, a quienes podrán acudir los connacionales con el propósito de exponer cualquier inquietud o reclamo respecto a cualquier derecho derivado del ordenamiento de la Comunidad Andina de Naciones.

Con base en lo anterior podemos dar fe de dicha afirmación también para los casos en los que medie un proceso arbitral; en el caso en concreto de Comcel S.A y ETB, podrían las partes solicitar la interpretación prejudicial al tribunal andino en cualquier momento del proceso, es decir, ya antes o después de ser emitido el laudo, concepto ratificado en los pronunciamientos de la Comunidad Andina. El Consejo de Estado, por su parte, y atendiendo el principio de seguridad jurídica, en sentencias como la de 9 de agosto de 2012 de nuestro caso en estudio, ha establecido que la interpretación prejudicial anteriormente referida debería ser únicamente solicitada previo a que el laudo arbitral sea proferido. Este máximo tribunal ha indicado ello con base en la certeza del derecho del cual todo individuo debe gozar, y no se debe dar la posibilidad que contra un laudo arbitral debidamente proferido pueda ser interpuesta una solicitud de interpretación prejudicial que ponga en duda la firmeza de dicho fallo. Y por firmeza, debemos resaltar la atinente a asuntos de fondo del laudo arbitral, que formaron parte integral e inamovible de la decisión tomada por el tercero que ha administrado justicia.

Para el caso concreto de Comcel S.A y La ETB, Se profirió laudo a favor de Comcel sobre las controversias que fueron sometidas al mecanismo de solución que se encontraba pactado en el contrato suscrito con la ETB, Esta última manifiesta su desacuerdo interponiendo recurso de anulación bajo las siguientes premisas: “objeto o causa ilícita, no haber fallado en derecho, errores aritméticos y por haberse concedido más de lo pedido.”, el cual fue declarado infundado por el Consejo de Estado en 2008, por no probar ninguna de las causales allí invocadas. Por lo cual la ETB procedió a interponer acción de incumplimiento contra Colombia ante el órgano jurisdiccional de la comunidad, por existir un error de competencia, esto debido a que el Consejo de Estado no era la autoridad competente para dirimir el conflicto que versa sobre normas

andinas de procedimiento y asuntos técnicos de interconexión y es por esto que se debió haber solicitado por parte del Tribunal Colombiano la interpretación que exige la comunidad.

Posteriormente el órgano andino impone la obligación al Estado Colombiano de dar cumplimiento al derecho comunitario, es decir solicitar y aplicar la interpretación prejudicial que se emita.

Para lo cual, al Consejo de Estado le es preciso pronunciarse sobre:

“Identificar las características que acompañan al Derecho Comunitario Andino con el fin de establecer el grado de obligatoriedad tanto de las disposiciones que lo integran como de las decisiones adoptadas por los órganos comunitarios especialmente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para las autoridades de los Estados Miembros de dicha organización supranacional.” y “Establecer, a partir de la regulación normativa interna colombiana, los rasgos distintivos, del objeto y del elenco de causales que pueden ser invocadas como fundamento del ejercicio del recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales, la forma en que dicha reglamentación debe armonizarse con el Derecho Comunitario Andino para efectos de resolver casos como el sublite”. (Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, 2012)

Y es por lo anterior que el Consejo decide, dejar sin efectos la sentencia del 2008, la cual declaró infundado el recurso interpuesto por la ETB, así como declarar la nulidad del laudo arbitral y su respectiva aclaración emitido por el Tribunal de Arbitramento. Dando paso al cumplimiento de solicitar la interpretación prejudicial referida por la Comunidad Andina y teniendo que pronunciarse el tribunal de arbitramento en el fondo de la materia.

Esto nos deja entre ver por los hechos que el Consejo de Estado, al acatar las instrucciones del Tribunal que hace parte de la Comunidad cambia el concepto anteriormente planteado frente a la

naturaleza del recurso extraordinario de anulación, permitiéndole a este hacer modificaciones y afectando la decisión en el fondo del proceso y agregando una nueva causal al ordenamiento, fundada en la obligación de garantizar el vigor y la diligencia análoga del Derecho Andino, de solicitar al Tribunal que el mismo conforma, la Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias a aplicar, lo cual en caso de su omisión crea un inexactitud a nivel procedimental que perturba la eficacia del laudo a lugar, proveyendo la posibilidad de la interposición del recurso extraordinario de anulación. Adicionalmente se establece que este podrá ser no solo por la solicitud de la parte impugnante si no por parte del juez, cabe resaltar que debido a la naturaleza del mecanismo de arbitramento y la Ley 1563 DE 2012, de su Estatuto, no debería existir la posibilidad que la solicitud de la interpretación sea de oficio, precisamente porque debe respetarse la voluntad de las partes y más si dicha interpretación afecta el fondo de la decisión.

Se deducirá entonces que el “catálogo” de la razones que se consagran en la ley para que un laudo pierda su eficacia y por ende se declare su nulidad, debe ampliarse, a la consistente en

“la omisión del deber de solicitar la Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias andinas aplicables al caso, por parte del Tribunal de Arbitramento que tenga conocimiento de este.” (Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, 2012)

Por todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta esta sentencia, la cual se ha analizado y abordado en el presente trabajo, se logra evidenciar no solamente que, las causales que se consagran para anular un laudo no son totalmente taxativas y que, más allá que el recurso de anulación tiene su fundamento en la forma, y se interpone solo por vicios de procedimiento, surge la eventualidad que con esta nueva causal el recurso procede por vicios de fondo, esto es,

que las causales de anulación también pueden ser interpuestas por irregularidades de tipo sustancial como puede ser observado claramente, por ejemplo, en el recurso de apelación.

Conclusiones

Colombia se ha caracterizado por ser un país garante de las normas supranacionales, esto se ve reflejado por el gran número de solicitudes de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sin embargo, con el caso ETB vs Comcel donde se introdujo la interpretación prejudicial como una nueva causal de anulación por parte del TJCA ha existido varias posturas que no están conforme con la decisión, ya que si bien esta materia no estaba regulada por parte del legislador colombiano, no era competencia del Tribunal andino puesto que solo pueden realizar interpretación prejudicial a las normas supranacionales y mucho menos equiparar al tribunal arbitral que nace por la voluntad de las partes con los jueces nacionales, y en consecuencia, se está incurriendo en una violación al ordenamiento jurídico nacional.

Contrario sensum, varios autores han venido defendiendo la interpretación que realizó el TJCA pues al no estar regulada la omisión de la interpretación prejudicial en los tribunales arbitrales por parte del legislador colombiano, se puede incurrir en una grave afectación al derecho de las partes, ya que al no mediar un recurso por ser un proceso de única instancia, no hay posibilidad de que la parte afectada pueda incoar una acción para corregir un vicio de fondo que se suscite dentro del trámite.

Por lo anterior, queda reflejado y sustentado a lo largo de esta monografía que las causales de anulación de la Ley 1563 de 2012 no son plenamente taxativas y que, aun cuando el recurso de anulación tiene su sustento en la forma, y se interpone únicamente por vicios procedimentales, emerge la posibilidad que con esta nueva causal el recurso de anulación proceda por vicios de

fondo cuyo fin no es más que el de salvaguardar los intereses de las partes so pena de que se incurra en nulidad o afectación grave a sus derechos.

Asimismo, con la inoperancia de la taxatividad en las causales de anulación y con la facultad que le dio el TJCA de que estas operen por vicios de fondo, se rompe la diferencia que tiene el recurso de anulación en los laudos arbitrales con el recurso de apelación en los procesos ordinarios de doble instancia, dejando abierta la posibilidad de que en un futuro no haya distinción alguna entre estos dos recursos.

Referencias

- Alejandro Daniel Perotti. (2001). Algunas Consideraciones sobre la interpretación prejudicial obligatoria en el Derecho Andino. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/bda/docs/CAN-INT-0010.pdf>
- Alarcón Pérez, N. (2013). Aspectos procedimentales de la interpretación prejudicial ante el tribunal de justicia de la Comunidad Andina.
- Altamirano asmat (2015) Análisis de la participación de los árbitros en las interpretaciones prejudiciales en la Comunidad Andina. Una revisión a partir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Pontificia católica del Perú
- Cárdenas, J. (2013). El laudo arbitral y los recursos de revisión y anulación en el arbitraje nacional. En Estatuto Arbitral Colombiano: análisis y aplicación de la Ley 1563 de 2012. Bogotá: Legis S. A.
- Código Civil. (1873)
- Código General del Proceso. (2012)
- Congreso de la República de Colombia. (12 de julio de 2012) Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. [Ley 1563 de 2012]. DO: 48.489.

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. (22 de junio de 2001). Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [Decisión 500]

Consejo de Estado, Sección tercera (1 de agosto de 2016), sentencia 56494. [CP. Martha Nubia Velásquez Rico]

Consejo de Estado, sección tercera, (31 de octubre de 2016), sentencia 57422, [CP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa]

Consejo de Estado, sección tercera, (25 de julio de 2016), sentencia 55477, [CP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa]

Consejo de Estado, sección tercera, (13 de abril de 2015), sentencia 52556, [CP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa]

Constitución Política de Colombia (1991) artículo 116 [Título V]

Lorena victoria Martínez arcos. (Julio - diciembre 2014). Sobre la inobservancia de la obligación de solicitar en el trámite arbitral la interpretación prejudicial de normas comunitarias al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Revista de Derecho Privado No. 52. Bogotá: Universidad de los Andes

Los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. (26 de mayo de 1969). Acuerdo de Integración subregional Andino [Acuerdo de Cartagena]

Presidente de la República de Colombia (7 de septiembre de 1998). Estatuto de los Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos. [Decreto 1818 de 1998]. DO: 43.380

Presidente de la República de Colombia, (16 de junio de 1971), Código de Comercio. [Decreto 410 de 1971]. DO: 33.339

- Cubillos, Pachón, López. (2014) Cubillos, A., Pachón, J.S., López-Cárdenas, C.M. (2014). Los principios de primacía y eficacia directa del derecho comunitario andino: conceptualización, desarrollo y aplicación. *Revista Jurídicas*, 11 (2), 148-169.
- Sáchica, L. (1990). *Introducción al Derecho Comunitario Andino* Bogotá: Temis, p.11
- Tangarife Torres, Marcel. *Derecho de la Integración en la Comunidad Andina*. Segunda Edición. Bogotá D.C.Ed. Cámara de Comercio de Bogotá. p. 406
- Tangarife Torres, Marcel. (Enero - junio 2016) *Cooperación judicial internacional Iberoamérica: La interpretación prejudicial andina: ¿mecanismo de cooperación o instrumento de interferencia en procesos judiciales y arbitrales?* *Revista del instituto Colombiano de Derecho Proceso*. No. 43. Bogotá: Instituto Colombiano de Derecho Procesal
- Uribe, D. C. (2013). *Anulación de laudos arbitrales por errores sustanciales en Colombia*. U. Externado de Colombia.
- Yeraldin Alvarado Valenzuela. (2014). *el recurso de anulación contra laudo arbitral: arbitraje nacional, Colombia, ley 1563 de 2012*. Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá D.C., Colombia.

Lista de anexos

Anexos:

1. Formato de ficha jurisprudencial

| | | | |
|-----------------|--|-------------------|--|
| Tribunal | | Sala | |
| Sección | | Subsección | |

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------|--|
| Fecha sentencia | | Radicación | |
| Consejero ponente | | Asunto | |
| Actor | | Demandado | |
| Descripción caso | | | |

2. Formato de ficha doctrinal

| | |
|----------------------|--|
| Documento: | |
| Autor: | |
| Edición: | |
| Ubicación: | |
| # de páginas: | |

| | |
|---|--|
| Referencia bibliográfica según norma APA | |
| Análisis | |

3. Formato de entrevista

| | |
|---|---|
| Problema de la investigación: | La inoperancia de la taxatividad en las causales de anulación de laudos arbitrales con la implementación de la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad andina y su posterior similitud con el recurso de apelación. |
| Objetivo general de la investigación: | La entrevista tiene por objetivo evidenciar que las causales de anulación de los laudos arbitrales no son taxativas y operan no solamente por vicios de forma sino también de fondo. |
| Objetivo específico de la investigación: | La consulta al experto tiene como fin específico detallar la manera en que se ha venido desarrollando la implementación de la interpretación prejudicial por vía jurisprudencial. |

| | |
|--|--|
| Tareas correspondientes a la entrevista: | Implementación de las preguntas a los expertos, con el fin de llevar a cabo nuestros objetivos generales y específicos. |
| Nombre del entrevistado: | |
| Razones que determinan en interés de entrevistarlo para esta investigación: | |
| Lugar de la entrevista: | |
| Fecha y hora de la entrevista. | |
| Pregunta Introductoria | ¿Qué piensa usted de la supranacionalidad del Derecho Comunitario Andino y su Obligatoriedad? |
| Bloque Temático | <p>¿Qué piensa usted frente a que las causales de anulación de laudos procedan únicamente por vicios de forma y que con la introducción de la interpretación prejudicial como una nueva causal se trate un vicio de fondo?</p> <p>¿Está usted de acuerdo con el TJCA al introducir la interpretación prejudicial como causal de anulación de laudos arbitrales sin haberse alegado en el trámite arbitral?</p> |

| | |
|--|--|
| | ¿Qué tramite procede cuando el juez nacional o tribunal no solicita la interpretación prejudicial obligatoria? |
|--|--|

4. CD que contiene grabación de las entrevistas realizadas a los doctores: Dr. Fabián López Guzmán y el Dr. Pedro Elías Ribero Tobar